

En uno de los muchos ejemplos de 2018, en noviembre los trabajadores griegos pararon para reclamar mejores salarios y convenios colectivos de trabajo.

Crédito: Ayhan Mehmet/Anadolu Agency/Getty Images

SECCIÓN 1

PROTESTAS EN TORNO DE PROBLEMAS COTIDIANOS

LOS PROBLEMAS COTIDIANOS SACAN A LA GENTE A LAS CALLES

Las razones por las cuales las personas protestan son numerosas, variadas y a menudo complejas. El año 2018 ofreció poderosos recordatorios de que las personas pueden ser movidas a protestar por cuestiones cotidianas como el precio de los alimentos básicos, como ocurrió en países como Sudán y Turkmenistán. Muchos de los eventos de 2018 subrayaron la necesidad de comprender las motivaciones esenciales, cotidianas y materiales que pueden ser los puntos de partida de la acción de masas.

En diversos países de África central y occidental, como Chad, Gabón y Níger, la gente salió a las calles para protestar contra políticas de austeridad de sus gobiernos que les perjudicaban materialmente. En algunos países, como Irak y Sudáfrica, lo que provocó las protestas fue la falta de acceso a agua potable; en otros – como Irlanda y Taiwán – se trató del acceso a la vivienda. En otros casos, como los de Djibouti, Ghana y Túnez, fue la falta de empleos; en Jordania, Panamá y Ucrania, entre otros países, fue el alza de los precios del combustible. En Nicaragua, una propuesta de reforma del sistema de seguridad social desencadenó grandes protestas que pronto abarcaron temas más amplios de corrupción y calidad democrática y que fueron reprimidas con fuerza letal. En Francia, un intento de aumentar los precios del combustible provocó una ola de protestas extraordinaria, y a veces violenta, en pleno corazón de Europa.

Las protestas desencadenadas por la ira que generan los problemas cotidianos a menudo son, por supuesto, sobre mucho más que eso. La indignación por los altos precios de los alimentos y los combustibles, la suba de impuestos, el desempleo y la denegación de servicios básicos, suele ser la causa desencadenante a partir de la cual los ciudadanos liberan años de frustraciones acumuladas ante la imposibilidad de hacerse oír, la distancia que los separa de las instituciones de gobierno y las desigualdades políticas

y económicas. Varias veces a lo largo de 2018, gobiernos encabezados por líderes políticos apoltronados en el poder y burocracias al servicio de la autoridad presidencial se mostraron simplemente poco dispuestos o incapaces de responder a las protestas sobre temas cotidianos, con lo cual a las frustraciones de la gente por las dificultades económicas se sumó su enojo por la exclusión de la toma de decisiones.

En muchos casos, revelaciones de corrupción en la cúspide del gobierno, como sucedió en Haití, Malawi y Rumania, irritaron profundamente a la ciudadanía, que no pudo sino contrastar su propia pobreza y su esfuerzo cotidiano por sobrevivir con la vasta riqueza de la elite, la visible impunidad de que disfrutaban los ricos y los poderosos y su falta de disposición a cumplir con su parte del contrato social. Las protestas sobre temas económicos a veces se convirtieron en momentos de exposición de profundos problemas de gobernabilidad y de denegación de la democracia, y pudo haberse aprovechado la oportunidad para abordarlos. Por eso, dichas protestas fueron objeto, una y otra vez, de una brutal represión.

Con frecuencia fueron los sindicatos los que dieron un paso al frente para exigir derechos colectivos, como ocurrió en Costa Rica, Fiyi y Guinea. Sin embargo, y con demasiada frecuencia, se encontraron con una respuesta violenta, como sucedió en Filipinas y Suazilandia. La sociedad civil, y en particular los defensores y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, el medio ambiente y la tierra, fue atacada en represalia por sus intentos de exigir rendición de cuentas en relación con los proyectos extractivos y de infraestructura en gran escala y de las poderosas empresas transnacionales que los ejecutan. Los peligros que los megaproyectos irresponsables pueden suponer para la ciudadanía se volvieron trágicamente evidentes cuando el derrumbe de una represa mató a varios cientos de personas en Laos; en el

marco de un espacio cívico cerrado, la sociedad civil encontró dificultades para ofrecer una respuesta humanitaria efectiva.

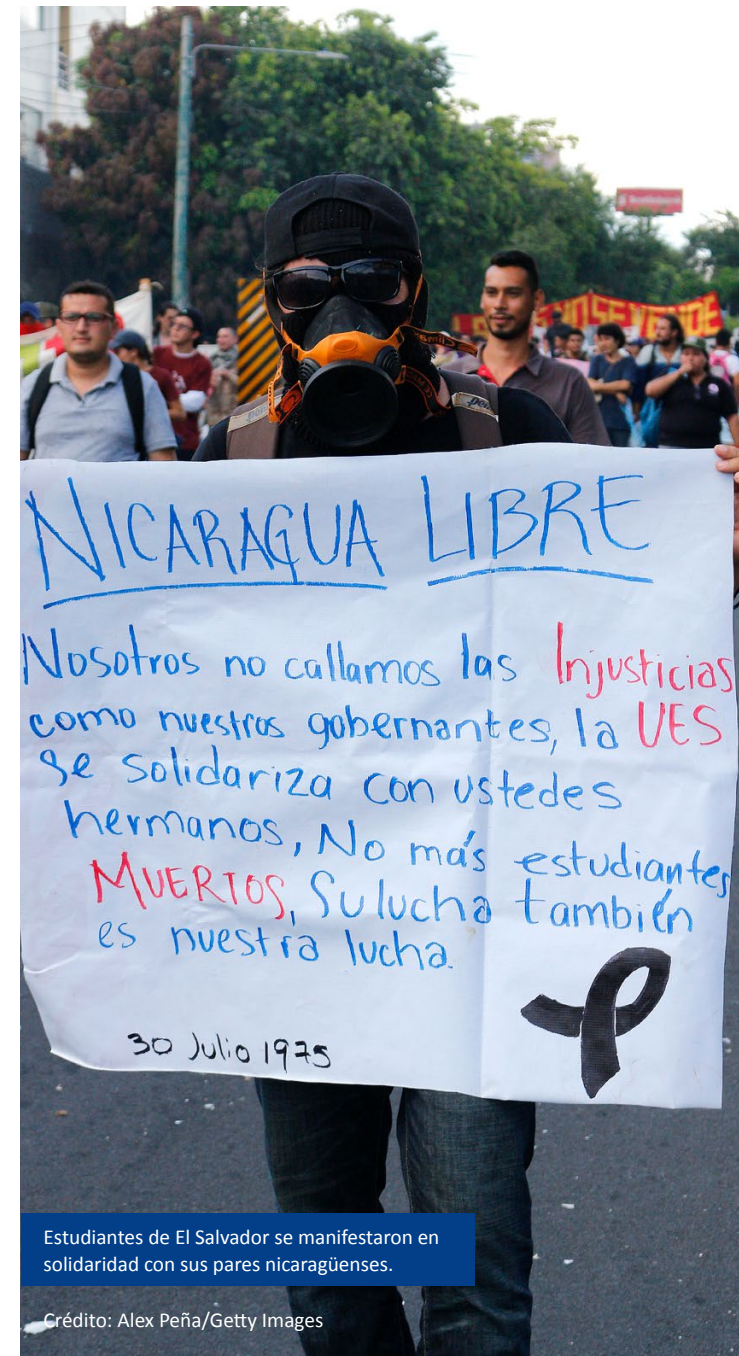
La sociedad civil, sin embargo, hizo frente al poder económico transnacional. En Australia se impuso frente a la industria del carbón, en América Latina se organizó para poner límites a las grandes inversiones chinas en la región, y en Canadá obtuvo una victoria notable como resultado de una campaña contra el impacto ambiental de un proyecto de oleoducto.

NICARAGUA: CAMBIOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL DESATAN IRA Y REPRESIÓN LETAL

En **Nicaragua**, la propuesta de un paquete de medidas impopulares que aumentarían los pagos a la seguridad social al tiempo que reducirían las pensiones fue la chispa inicial de las grandes **protestas** que comenzaron en abril. Si bien el gobierno inicialmente **afirmó** que se trataba de tan solo unas pocas protestas dispersas, lo cierto fue que éstas se extendieron rápidamente por las principales ciudades de Nicaragua a medida que sus participantes eran atacados violentamente por fuerzas estatales y **grupos oficialistas armados**. En el pasado, la violencia había demostrado su efectividad para desalentar las protestas. Pero esta vez, cuando las imágenes de la represión se difundieron rápidamente en las redes sociales, muchos más ciudadanos decepcionados salieron a las calles. **Amaru Ruiz**¹, de la **Fundación del Río**, describe cómo se propagaron las protestas:

No creo que el gobierno, ni nadie más, imaginara la reacción. Mucha gente, sobre todo estudiantes, inmediatamente empezaron a protestar en la capital, Managua, y en la ciudad de León. Todos los movimientos sociales, incluidos el movimiento campesino y el de mujeres, empezaron a pronunciarse en respaldo de los estudiantes, y las protestas se hicieron masivas. Fue un movimiento autoconvocado, muy diverso, que salió a decir BASTA. Ya no se trataba de un agravio específico, sino de un reclamo más articulado de democracia genuina, basada en el respeto de la voluntad popular, por instituciones transparentes y una justicia independiente.

El gobierno no se esperaba semejante reacción. Las protestas que se habían producido hasta entonces, y que habían sido muchas veces reprimidas, se habían dado en zonas rurales,



Estudiantes de El Salvador se manifestaron en solidaridad con sus pares nicaragüenses.

Crédito: Alex Peña/Getty Images

¹ Todas las entrevistas citadas en este informe son extractos editados. Las versiones completas de las entrevistas pueden encontrarse en nuestro sitio web, <https://www.civicus.org/index.php/media-center/news/interviews>.

“
 DADA LA
 INTENSIDAD DE LA
 IRA CIUDADANA,
 EL GOBIERNO
 RETROCEDIÓ
 RÁPIDAMENTE EN
 SU PROPUESTA
 DE REFORMA
 DEL SISTEMA DE
 PENSIONES, PERO
 SIN EMBARGO
 LAS PROTESTAS
 CONTINUARON.

”

aisladas y con poca población, donde los medios raramente llegan. Pero que en zonas urbanas, densamente pobladas, con las cámaras adelante, policías, paramilitares y sectores armados de las Juventudes Sandinistas empezaran a disparar contra la gente... eso fue algo nunca visto.

Como sugiere Amaru, y tal como lo indica la persistencia y la escala de las protestas, más allá de la disconformidad inicial ante los cambios en la seguridad social, la indignación pública fue mucho más profunda. Los manifestantes no solo expresaron su oposición a los cambios en el sistema de pensiones; también expresaron su indignación por la corrupción generalizada que veían todos los días y la naturaleza crecientemente autoritaria del gobierno del presidente Daniel Ortega y la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo. La reforma democrática y las elecciones libres y limpias pronto encabezaron la lista de demandas de los manifestantes. Amaru se explaya en la indignación ante el poder económico concentrado que movilizó a los manifestantes:

El gobierno comenzó a interesarse más en acumular riqueza. Empezó a hacer inversiones a título familiar, y se profundizó la mezcla no solo entre Estado y partido, sino también entre partido y familia. La vicepresidenta Murillo adquirió más poder que cualquier ministro. Durante largo tiempo la familia Ortega-Murillo ha concentrado los cargos de alta dirección del gobierno, y además se ha convertido en un emporio económico.

*Sus intereses de negocios involucraron la aprobación, por parte del Estado, de concesiones a poderosos inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros: concesiones de minería como la de Rancho Grande; para plantaciones, por ejemplo de palma africana; y para megaproyectos como la represa de Tumarín en el Río Grande de Matagalpa, el puerto de aguas profundas de Bluefields y, finalmente, el **Canal Interoceánico**.*

Dada la intensidad de la ira ciudadana, el gobierno retrocedió rápidamente en su propuesta de reforma del sistema de pensiones, pero sin embargo las protestas continuaron. Los manifestantes fueron severamente reprimidos con violencia letal y generalizada de las fuerzas de seguridad, que incluso usó munición real causando muertes a diario durante varias semanas. Se organizaron nuevas protestas para exigir justicia para quienes habían sido asesinados, pero también fueron reprimidas por un gobierno que las caracterizó como un intento de golpe de Estado y pareció decidido a mantenerse en el poder cualquiera fuera el costo en vidas humanas. Una marcha celebrada en mayo en ocasión del **Día de la Madre**, en apoyo a las mujeres cuyos hijos habían sido asesinados en protestas, provocó 16 muertes y alrededor de 200 heridos. En junio dos estudiantes fueron asesinados **a tiros** después de que su grupo se refugiara en una iglesia, lo cual sugirió que ya no quedaba ningún lugar seguro.

Según un **informe** de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre el 18 de abril y el 19 de junio la represión estatal provocó al menos 212 muertes. A fines de agosto, la CIDH calculó la cifra de muertos en más de 300 aunque, según fuentes de la sociedad civil, podrían haber sido unos 500. Más de 2000 personas resultaron heridas y 550 fueron detenidas y procesadas, y al menos 144 estudiantes fueron expulsados de la universidad. En respuesta a la represión, la CIDH lanzó el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), para vigilar la implementación de sus recomendaciones, y durante los meses siguientes **otorgó** medidas de protección a más de un centenar de personas involucradas en las protestas.

El análisis de la CIDH dejó en claro el patrón de la represión. La detención arbitraria y la fuerza policial desproporcionada fueron acompañadas por acciones intimidatorias y violentas de grupos armados progubernamentales, alentados por una persistente campaña propagandística para vilipendiar a los manifestantes. En represalia por su participación, el gobierno incluso **negó** atención médica de urgencia a manifestantes gravemente heridos. Según la CIDH, alrededor de 300 profesionales de la salud fueron despedidos por desobedecer las órdenes del gobierno de no atender a los manifestantes heridos.

Los detenidos también fueron **maltratados**: numerosos manifestantes fueron recluidos en la infame prisión de El Chipote, donde a muchos se les negó atención médica y fueron sometidos a torturas. Al mismo tiempo, varios funcionarios responsables de la represión, incluido el director de El Chipote, fueron recompensados con **ascensos**. Las mujeres fueron especialmente vulnerables a los **malos tratos** bajo custodia. En octubre, varios hombres armados y enmascarados irrumpieron en las celdas de 17 presas políticas y les **golpearon**.

La respuesta de las autoridades consistió en intensificar el uso del Código Penal contra los activistas de la sociedad civil, en tanto que en julio se aprobó apresuradamente una **Ley antiterrorista** con amplias disposiciones que permitían al estado calificar a los ciudadanos como terroristas por ejercer su derecho de reunión pacífica. Los manifestantes, muchos de ellos

estudiantes o miembros del movimiento campesino, fueron rutinariamente acusados de una variedad de delitos, tales como terrorismo, participación en un grupo delictivo, obstrucción de los servicios públicos, obstrucción de funciones, interferencia con la autoridad, posesión ilegal de armas de fuego o municiones, amenaza con armas, robo agravado, secuestro simple, intento de homicidio y asesinato. El cargo de asesinato fue particularmente abusado para culpar a líderes sociales y manifestantes por muertes ocurridas durante las protestas. El gobierno responsabilizó a los manifestantes por la violencia y afirmó que las fuerzas de seguridad habían sido atacadas y se habían visto obligadas a defenderse.

Los activistas fueron difamados y agredidos con campañas de estigmatización, vigilancia, escuchas telefónicas, interferencia en las comunicaciones, amenazas y ataques físicos contra ellos y sus familiares, intimidación y vigilancia física por parte de vehículos de la policía, obstáculos a su libertad de movimiento, confiscación de sus propiedades, interrogatorios y detenciones ilegales acompañadas de golpizas, torturas y denegación de asistencia legal, y actos de agresión perpetrados por grupos vinculados al gobierno. Los ataques sexuales, la tortura sexual y las amenazas o actos de violencia contra miembros de su familia, y en particular contra sus hijos, fueron específicamente utilizados contra las mujeres. No resultó sorprendente, entonces, que muchos defensores y defensoras de derechos humanos **huyeran**, principalmente a Costa Rica, donde según se informó, hacia octubre se habían recibido alrededor de 30.000 solicitudes de asilo.

También se intensificó la criminalización de grupos que habían estado activos durante mucho tiempo antes del inicio de las protestas. Tal fue el caso del movimiento anticanal, movilizado contra el proyecto del **Canal Interoceánico**, que durante los últimos cinco años ha liderado cientos de marchas y protagonizado innumerables episodios de represión. **Medardo Mairena**, uno de los líderes del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, fue detenido y privado de su libertad en dos oportunidades; en la segunda, ocurrida en el contexto de las protestas, fue recluido indefinidamente con prisión preventiva por **cargos** de terrorismo,

crimen organizado, secuestro simple, asesinato, daños a la propiedad pública, obstrucción de los servicios públicos y lesiones. A medida que avanzó el año, el gobierno redobló la represión al **cancelar** la personería jurídica de nueve organizaciones de la sociedad civil (OSC), entre ellas las que habían **participado** en audiencias de la CIDH.

Incluso antes de esta ola de protestas, los periodistas nicaragüenses solían padecer amenazas, intimidaciones y agresiones, particularmente cuando informaban sobre proyectos de infraestructura controvertidos como el Canal Interoceánico, y sobre protestas, asuntos de gobierno y denuncias de fraude electoral. Además de la intimidación y las amenazas de rutina en las redes sociales, durante las protestas de 2018 hubo un **aumento** en los actos de agresión, golpizas y destrucción o robo de equipos de periodistas que cubrían las protestas, perpetrados por la policía y por bandas armadas. El 21 de abril, el periodista Ángel Gahona fue asesinado **a tiros** mientras cubría una protesta. Ese mismo mes, Radio Darío, en la ciudad de León, fue **incendiada** por una turba oficialista. Según se informó, al menos cuatro medios de comunicación fueron **cerrados** durante las protestas.

La represión acabó acallando las protestas, aunque en agosto se produjeron nuevas movilizaciones, y en septiembre se desarrolló una **huelga nacional** de un día. Amaru señala que la represión ha dejado sin resolver los problemas clave, y pide solidaridad de la sociedad civil para ayudar a resolverlos:

En el país diversos sectores estamos luchando por una salida civil y pacífica, pero la posibilidad de que haya un rebrote de violencia es bien real. El presidente ha dicho que ya no habrá más diálogo, y si verdaderamente el diálogo se ha terminado, pueden pasar dos cosas: que aumente la violencia, o que predomine la resignación. Esta última no es la opción más viable: es una salida solamente temporaria, en la medida en que, por acumulación de frustraciones, en algún momento las tensiones irresueltas terminarán regresando a la superficie y la gente volverá a salir a la calle. Es decir, sería tan solo una forma de posponer la violencia. Lo cierto es que ante la disyuntiva de qué hacer ahora, si seguir saliendo a la calle y exponernos a que

nos sigan matando, o quedarnos todos en casa, muchos van a preferir quedarse en sus casas, y otros seguirán saliendo, mientras que otros tantos dejarán de protestar y comenzarán a conspirar.

Necesitamos solidaridad con la gente que sigue dando la batalla en Nicaragua y con la gente que se ha ido y está haciéndolo desde afuera. Asimismo, las OSC y los movimientos sociales que permanecen activos necesitan apoyo en materia de estrategia, recursos y protección.

La solidaridad de la sociedad civil se hizo aún más necesaria cuando, para evitar el escrutinio internacional, el gobierno nicaragüense expulsó a los observadores internacionales a quienes inicialmente había autorizado a ingresar, incluidos el MESENI y la **Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas**. El espacio para el monitoreo de la sociedad civil se derrumbó, dados los numerosos ataques contra el espacio cívico. Las OSC nacionales, regionales e internacionales, incluido un grupo de **323 OSCs**, **condenaron** rápidamente la represión. Para continuar monitoreando la situación de derechos humanos, a principios de enero de 2019 un grupo de OSC regionales e internacionales, incluida CIVICUS, se unió para **establecer** un Observatorio Internacional sobre la Situación de los Derechos Humanos en Nicaragua. Seguirán vigilando y trabajando para llamar a rendir cuentas a los responsables de abusos a los derechos humanos.

CHAD, GABÓN Y NÍGER: FURIA ANTE LA AUSTERIDAD EN ÁFRICA CENTRAL Y OCCIDENTAL

En 2018 África central y occidental albergó múltiples protestas contra las políticas de austeridad. En Europa, la economía de la austeridad – recortes del gasto público que impactan desproporcionadamente sobre las personas



En Níger, uno de los países más pobres del mundo, una iniciativa de Ley de Presupuesto desató protestas por temor a que aumentara el precio de bienes básicos y subieran los impuestos.

Crédito: Scott Peterson/Getty Images

más pobres y excluidas y aumentan la desigualdad – se ha desacreditado cada vez más desde que fue impuesta tras la crisis económica que se desarrolló a partir de 2008. Los efectos de la austeridad alimentaron el viraje hacia el populismo de derecha y el nacionalismo económico (*véase sección 3*) que estamos viendo en muchos países europeos. En el resto del mundo, especialmente debido a las caídas del precio del petróleo a partir de 2014, las políticas de austeridad siguen siendo impuestas por líderes políticos fuera de sintonía con sus sociedades e impulsadas por instituciones financieras internacionales. Con frecuencia, la comprensible reacción de quienes luchan por sobrevivir es recibida con represión.

En Chad, ocho OSC convocaron protestas en enero contra las medidas de austeridad del gobierno y los costos crecientes del combustible, un tema delicado en un país cuya principal exportación es el petróleo. A principios de 2018 Chad también experimentó huelgas de transporte provocadas por los aumentos de los precios del combustible. Pero las protestas planeadas para el 25 de enero fueron prohibidas unos días antes, y en una actitud amenazadora el gobierno envió mensajes de texto a todos los usuarios de teléfonos móviles informándoles que las protestas habían sido prohibidas. El gobierno afirmó que la prohibición se había introducido como una medida de lucha contra el terrorismo, citando a la insurgencia de Boko Haram en el área del Lago Chad. Una vez más en la región, la preocupación por el terrorismo se combinó deliberadamente con acciones para suprimir la expresión legítima de disenso.

Cuando las protestas continuaron su curso, se encontraron con violencia de las fuerzas de seguridad, medidas punitivas y cortes de internet. Se informó que más de 140 personas, muchas de ellas estudiantes, fueron arrestadas; 17 de las personas arrestadas durante las protestas recibieron sentencias de cuatro meses de cárcel. Diez partidos políticos que participaron en las protestas vieron sus actividades suspendidas temporalmente. Ese mismo mes, una protesta estudiantil en solidaridad con una huelga de maestros contra el impacto de las medidas de austeridad sobre sus salarios fue dispersada con gases lacrimógenos y se practicaron 60 arrestos.

En febrero, fue arrestado y torturado **Alain Didah Kemba**, portavoz del movimiento de ciudadanos IYINA ('estamos cansados'), que reúne a jóvenes, OSC y medios de comunicación para hacer campaña sobre temas socioeconómicos e impulsar reformas democráticas. A medida que avanzaba el año, otros activistas fueron arrestados cuando convocaron a la ciudadanía a participar en las protestas, y hubo periodistas detenidos por cubrir las protestas.

Tras las movilizaciones de enero, los principales sindicatos anunciaron una huelga general del sector público contra los recortes en los subsidios y bonificaciones que dieron a los trabajadores mucho menos para llevar a casa. Las protestas continuaron a pesar de la represión, incluyendo un '**Jueves de furia**', organizado en febrero contra las medidas de austeridad, aunque la participación se vio obstaculizada por una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad, y un '**Día de Ciudad Muerta**' que tuvo lugar en marzo, en apoyo a los trabajadores del sector público en huelga. El Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, (*véase sección 2*) también se convirtió en un '**día de luto**' para las trabajadoras en huelga; con las escuelas y los hospitales cerrados, había poco que celebrar. La huelga fue cancelada en marzo tras llegar a un acuerdo, pero fue **reanudada** en mayo ante el incumplimiento del acuerdo. La huelga solo **terminó** cinco meses después, en octubre, cuando el gobierno hizo nuevas concesiones. Durante ese tiempo, las protestas continuaron estando prohibidas y el acceso a las redes sociales **restringido**.

El presidente Idriss Déby, en el cargo desde 1990, **augmentó** su poder en abril tras imponer una **nueva constitución**. Parece claro que la ira pública en Chad continuará siendo recibida con hostilidad por una administración fuera de sintonía con la ciudadanía, que parece más preocupada por mantenerse indefinidamente en el poder.

El vecino de Chad, **Níger**, experimentó **protestas** similares en 2018, provocadas por la Ley de **Presupuesto** aprobada en 2017. A los manifestantes les preocupaba que la ley aumentara el precio de los productos básicos e introdujera nuevos impuestos. La gente salió a las calles cada dos semanas

en enero, febrero y marzo; este último mes, los partidos que apoyan al presidente Mahamadou Issoufou organizaron una contra-protesta. A medida que las protestas continuaron se fueron sumando demandas, tales como la salida de las tropas extranjeras estacionadas en Níger.

También a medida que continuaron las manifestaciones, los manifestantes se encontraron con una creciente intolerancia estatal frente al disenso. Durante una sentada en febrero, el partido político Frente de Oposición Independiente informó que 10 de sus miembros habían sido arrestados, mientras que una protesta contra la Ley de Presupuesto planeada para marzo fue **prohibida** por las autoridades locales por falsas razones de seguridad. Cuando la protesta igualmente siguió adelante, se produjeron choques y se informó que 26 personas fueron **arrestadas**, incluidos cuatro líderes de la sociedad civil. En **julio**, los **cuatro** recibieron penas de prisión en suspenso y tres de ellos fueron liberados, mientras que el cuarto, Lirwana Abdourahmane, permaneció en la cárcel luego de ser condenado por desacato al tribunal. Tras emitir una entrevista con el abogado que representaba a uno de los detenidos, un canal de televisión fue clausurado.

En abril otra protesta en la capital, Niamey, fue prohibida por motivos de seguridad, se registraron nuevos enfrentamientos y tres personas más fueron arrestadas cuando la protesta procedió de todos modos. Luego de un enfrentamiento entre estudiantes movilizados y las fuerzas de seguridad, se cerró un campus universitario en Niamey. Las OSC condenaron la prohibición de las protestas y la ola de arrestos de activistas. Al igual que en Chad, en respuesta a esta protesta las autoridades restringieron la libertad de expresión. A los periodistas se les impidió cubrir las manifestaciones. En febrero, varios medios de comunicación dejaron en blanco sus portadas y apagaron sus pantallas en una muestra simbólica de oposición a las restricciones a los medios.

En **Gabón**, la acción sindical se colocó en primer plano. Una serie de **huelgas** llamaron la atención sobre el impacto de un paquete de medidas de austeridad introducido por el gobierno en febrero, junto con las

preocupaciones relacionadas con el costo de la vida y la indignación por el abuso de poder del gobierno. La capital, Libreville, fue paralizada por una **huelga** de taxistas en febrero, motivada por el aumento de los costos del combustible y la corrupción policial. En respuesta a las medidas de austeridad, en marzo se convocó a una huelga sindical general de funcionarios públicos por tiempo indefinido. Sus demandas específicas se relacionaban con los derechos de pensión y el restablecimiento de la Convención Nacional de Sindicatos en el Sistema de Educación, suspendida por el gobierno en 2017. En abril, el personal de la televisión y la radio públicas también se declararon en huelga por atrasos en el pago de salarios y la interferencia del gobierno en su trabajo. Pero una nueva protesta sindical planificada para agosto contra nuevas medidas de austeridad fue **prohibida**. A fines de ese mes, alrededor de 28 personas fueron detenidas mientras intentaban realizar una nueva protesta.

Estas huelgas se produjeron junto con otras motivadas por la desconfianza y la tensión en las relaciones sociales. Una huelga general de magistrados, convocada por tiempo indeterminado, comenzó en diciembre de 2017 y continuó en 2018, motivada por una disputa entre los jueces y el ministro de Justicia; cuando los jueces criticaron al ministro por interferir, él a su vez los acusó de corrupción. La huelga recién se resolvió a fines de febrero, a favor de los jueces, cuando el ministro fue trasladado a otra función.

El estado de continua inquietud bajo el gobierno del presidente Ali Bongo, cuya familia ha estado en el poder durante más de 50 años, se expresó en un intento fallido de **golpe de estado** a principios de enero de 2019, lo que aumentó los temores de una nueva oleada de represión y violación de los derechos fundamentales.

PRINCIPALES PREOCUPACIONES: ALIMENTOS, COMBUSTIBLE Y EMPLEOS

Durante 2018 la preocupación por los altos costos de los alimentos y el combustible y las dificultades para conseguir y mantener un empleo sacaron a mucha más gente a las calles.

La escasez de alimentos y combustibles se convirtió en un punto crítico cuando el gobierno de **Sudán** aprobó en enero un presupuesto que aumentaría significativamente los costos cotidianos de los ciudadanos, ya que **duplicó** el precio del pan de la noche a la mañana y fue acompañado de una

“

LA ESCASEZ DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES SE CONVIRTIÓ EN UN PUNTO CRÍTICO CUANDO EL GOBIERNO DE SUDÁN APROBÓ EN ENERO UN PRESUPUESTO QUE AUMENTARÍA SIGNIFICATIVAMENTE LOS COSTOS COTIDIANOS DE LOS CIUDADANOS.

”

fuerte devaluación de la libra sudanesa. Las medidas provocaron protestas, ya que la gente adjudicó los cambios a la mala administración, la corrupción y los costos del conflicto que continúa en Darfur. No sin razón, preguntaron porqué ellos, y no sus líderes, deberían pagar el precio de estos desastrosos.

Pero en un contexto en que el espacio cívico – el espacio para la sociedad civil – está cerrado, las protestas pacíficas se encontraron con la violencia de las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos y bastonazos; también **se reportaron** asesinatos. Se informó que más de 300 personas fueron detenidas en los primeros meses de 2018, entre ellas líderes de la oposición y **destacados defensores de derechos humanos**. Según las mismas fuentes, al menos 15 periodistas fueron arrestados mientras cubrían las manifestaciones, y en un esfuerzo por evitar que se difundieran las noticias de las protestas se bloqueó la circulación de varios periódicos.

En septiembre, el presidente Omar al-Bashir, en el poder desde 1989, nombró a un nuevo **primer ministro** en un esfuerzo evidente por aliviar los problemas económicos del país. Sin embargo, la medida no logró evitar que en diciembre estallaran más **protestas** antigubernamentales en gran escala, alimentadas por la furia ante la marcha de la economía y la indignación frente a la corrupción. Las protestas comenzaron en la ciudad norteña de Atbara antes de extenderse a la capital, Jartum. **Abdel-Rahman El Mahdi**, de la **Iniciativa para el Desarrollo de Sudán**, describe estas protestas más recientes.

Las protestas fueron desatadas por el aumento del costo de vida y las crecientes dificultades que enfrentan los sudaneses para satisfacer sus necesidades básicas. Una política económica y fiscal deficiente, junto con una corrupción desenfrenada, resultó en tasas récord de inflación, multiplicando la pobreza y causando una escasez crítica de productos y servicios básicos. La falta de combustible y pan en todo el país resultó en largas filas de espera durante horas. La crisis de liquidez crónica por la cual los bancos y cajeros automáticos solo entregaban un máximo de 2000 libras

sudanesas por día (aproximadamente 40 dólares) también empeoró las cosas y alimentó la falta de confianza en el sistema bancario y en la situación general.

Las manifestaciones pacíficas se extendieron rápidamente por todo Sudán. En todas las grandes ciudades la gente salió por centenares pidiendo reformas y exigiendo soluciones inmediatas para hacer frente a la crisis que estaba llevando al país al borde del colapso. Las demandas escalaron rápidamente en reacción a la violenta respuesta del gobierno a las protestas.

La respuesta del gobierno fue, una vez más, desproporcionada y letal, con tácticas similares a las utilizadas contra protestas anteriores. Abdel-Rahman describe la violenta reacción del gobierno, colocándola en el marco más amplio de la represión del espacio cívico en Sudán:

La respuesta de las autoridades sudanesas a estas protestas pacíficas fue violenta y represiva. Para enero de 2019, según el propio gobierno, 800 manifestantes habían sido detenidos por las fuerzas de seguridad sudanesas y 19 personas habían muerto en enfrentamientos. Otras fuentes más imparciales proporcionaron cifras aún más altas. Según activistas y trabajadores médicos sudaneses, murieron al menos 40 personas. Entre los arrestados se contaron manifestantes, periodistas, médicos, abogados y líderes de partidos de oposición.

La violencia desenfrenada es practicada activamente por el aparato de seguridad del gobierno. Los relatos de disparos con municiones de plomo, golpes y torturas han aumentado hasta el punto de que estas parecen haberse convertido en las prácticas corrientes de manejo de manifestaciones del aparato de seguridad. Constantemente circulan en las redes sociales videos que dan cuenta del alcance de la brutalidad. Los hospitales donde algunos manifestantes heridos buscaron atención médica también fueron atacados por las autoridades.



Ciudadanos sudaneses protestaron en enero cuando el gobierno aprobó un presupuesto que aumentaba fuertemente sus costos cotidianos, y se enfrentaron con la violencia de las fuerzas de seguridad.

Crédito: Stringer/Anadolu Agency/Getty Images

La nueva ola de protestas y la respuesta de mano dura del gobierno se deben a un prolongado fracaso del régimen a la hora de defender los valores y principios democráticos y garantizar la protección y la promoción adecuadas del espacio cívico. Durante diciembre de 2018 y enero de 2019, el espacio cívico ha sufrido ataques implacables de parte del gobierno. La libertad de expresión está siendo atacada: los servicios de seguridad despliegan métodos brutales para amordazar a los medios y silenciar el disenso, hostigan y prohíben que los periodistas escriban, cierran periódicos y confiscan sus tiradas en cuanto salen de imprenta.

Se han recortado las libertades en internet. Desde que comenzaron las protestas, el gobierno ha cerrado el acceso a las redes sociales en todo Sudán. Según MTN, Sudani y Zain, los tres operadores de telecomunicaciones de Sudán, Facebook, Twitter, WhatsApp y otras plataformas de redes sociales solo son accesibles a través del uso de un servicio de red privada virtual (VPN), pero estos también tienen sus propios problemas de conectividad y la mayoría de los usuarios de internet no saben que existen o cómo acceder a ellos.

La brutal respuesta a las demostraciones solo sirvió para alimentar más protestas y condujo a una escalada de las demandas del pueblo sudanés, que ahora está pidiendo la renuncia del presidente al-Bashir y su gobierno.

La respuesta del Estado fue tristemente predecible. Sin embargo, en algún momento el ciclo de protesta y represión en Sudán debe quebrarse. Abdel-Rahman concluye especificando qué es lo que debe cambiar:

La actual crisis económica que enfrenta Sudán está montada sobre una crisis política más profunda y fundamental caracterizada por el mal gobierno, el abuso de poder y las persistentes injusticias. Años de gobierno del Partido del Congreso Nacional encabezado por el presidente Al-Bashir han llevado a Sudán al borde del colapso en tanto que estado. Hoy, Sudán se encuentra en una coyuntura crítica:



El Festival Musical Hagana, una iniciativa del movimiento #Anataban, reúne a gente de Sudán del Sur y Kenia tras un mensaje de coexistencia pacífica. de Anataban.

Crédito: página de Facebook de Anataban.

la necesidad de encontrar el camino hacia un estado más democrático, justo y pacífico nunca ha sido más profunda.

Lo más importante de la agenda debería ser encontrar una solución a la grave crisis política que se ha prolongado durante varios años. Los esfuerzos del presidente al-Bashir y del partido gobernante han carecido tanto de voluntad política como de los ajustes y mecanismos institucionales necesarios para funcionar. Para desenredar la maraña de vínculos entre el estado y el partido gobernante es necesario establecer nuevos acuerdos institucionales y de poder compartido que garanticen la participación de los partidos de oposición y los movimientos rebeldes. Para que esto suceda, el presidente Al-Bashir deberá renunciar y ceder poder a algún tipo de consejo interino que debería plantearse como prioridad concertar un acuerdo de paz con los movimientos rebeldes y asegurar su participación en la conformación de una agenda y un gobierno interino que sería responsable de dirigir el país durante un período de transición.

Sería igualmente importante comenzar a abordar la crisis económica que atraviesa el país. Esta es un área en la que la comunidad internacional tiene mucho que aportar. Eliminar a Sudán de la lista de estados patrocinadores del terrorismo sería un primer paso importante. Un segundo paso sería establecer, rápidamente, los esperados acuerdos de alivio de la deuda para Sudán. Estos dos pasos servirían para iniciar una etapa muy necesaria de normalización de relaciones con la comunidad financiera internacional y allanar el camino para un programa de estímulo económico que alivie la actual crisis. Sin embargo, esto debe vincularse a la resolución de la crisis política que subyace a la crisis económica.

Una tercera e importante área que debe ser atendida es la apertura del espacio cívico. Las dimensiones del espacio cívico que requieren atención incluyen los derechos humanos y el estado de derecho, las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica, la participación ciudadana, la libertad de religión y el derecho a la no discriminación. Que haya progresos tangibles en estas áreas es un requisito previo de todo proceso de reforma constitucional o elecciones que faciliten la transición hacia un camino más seguro hacia la democracia.

En resumen, sería necesario implementar un proceso integral e inclusivo de reforma política y económica estrechamente vinculado al espacio cívico para lograr un progreso significativo en la tarea de devolver a Sudán al camino hacia la democracia.

En comparación, **Túnez ha sido aclamada** como un caso de éxito por su transición pacífica a la democracia tras la **Revolución de los Jazmines** de enero de 2011. La sociedad civil ha desempeñado

un papel sumamente importante para lograr la paz y el desarrollo de las instituciones democráticas. Pero el legado de esa revolución fue empañado en su séptimo aniversario, en el mes de enero, cuando cientos de personas salieron a las calles en varias ciudades para protestar contra las medidas de austeridad introducidas por el gobierno, lo cual provocó enfrentamientos violentos y al menos **800 arrestos**, muchos de ellos de personas jóvenes. La respuesta del arresto masivo sugirió que el gobierno estaba mal equipado para lidiar con la irritación genuina provocada por las dificultades económicas y satisfacer las expectativas de la ciudadanía respecto de que la democracia debería arrojar dividendos conducentes a mejoras en sus vidas, especialmente en lo que se refiere al flagelo del desempleo juvenil generalizado. Mientras tanto, en la vecina **Libia**, a pesar de un contexto que hace muy difícil el disenso, cientos de personas **protestaron** en marzo en la capital, Trípoli, contra los altos precios y la corrupción.

Estas cuestiones, por supuesto, no se limitaron al continente africano. En 2018, **Turkmenistán** experimentó su peor **crisis** económica desde su independencia, en 1991, debido a la caída del precio del petróleo, del cual depende en gran medida su economía. La crisis se caracterizó por el desempleo generalizado, la escasez de bienes básicos, el racionamiento, las largas colas y las alzas de precios. El pan, la harina, los huevos y el aceite de cocina se volvieron **difíciles de encontrar**, particularmente fuera de la capital, El Ashgabat. Pero en lugar de tratar de abordar estos problemas, la respuesta del gobierno fue propagar una absurda propaganda de estilo soviético sobre la abundancia de bienes de consumo en el país e insistir en la **participación forzada** de la ciudadanía en las celebraciones nacionales, incluidos los eventos del Día de la Independencia en septiembre; incluso se requirió que los participantes reacios a asistir cubrieran sus propios costos de asistencia. Al mismo tiempo, el gobierno impuso deducciones salariales forzosas a los empleados del sector público y trató de suprimir las voces disidentes, entre otras cosas insistiendo en la eliminación de las antenas parabólicas a través de las cuales las personas podían recibir noticias del extranjero. A causa de la represión, las protestas son poco frecuentes en

Turkmenistán, pero julio trajo noticias de una **manifestación** espontánea provocada por un aumento del precio de los pollos. Varios manifestantes fueron detenidos y, según se informó, se les golpeó mientras permanecían en prisión.

Si bien la atención del mundo se ha centrado en el **conflicto** en curso que **Ucrania** mantiene con **Rusia**, en 2018 muchos ucranianos salieron a las calles por problemas materiales. En octubre hubo protestas contra el alto costo del **combustible**, mientras que los primeros meses de 2018 estuvieron marcados por varias protestas provocadas por el persistente flagelo de la **corrupción**; en esa ocasión, alrededor de 50 personas fueron arrestadas cuando la policía desmanteló un **campamento** montado en el espacio frente al edificio del parlamento. Los sindicatos también tomaron medidas en Ucrania. En julio, mineros en huelga, organizados por dos sindicatos, protestaron frente al parlamento ucraniano para exigir el pago de salarios atrasados, alegando que no se les había pagado durante dos meses y medio. En una **protesta** anterior, en el mes de junio, los **mineros** del carbón se habían unido a los trabajadores de limpieza de Chernobyl y a los veteranos de la invasión soviética de Afganistán para protestar por una serie de cuestiones básicas, como el transporte y el apoyo a la discapacidad. Se produjeron enfrentamientos con la policía cuando los manifestantes intentaron entrar en el edificio legislativo.

Los precios del combustible, junto con los cambios a la ley impositiva que aumentó las cargas para las personas con menores ingresos, hicieron que en noviembre centenares de personas salieran a **protestar** a las calles de **Jordania**. Los manifestantes se organizaron usando el hashtag #Maanash ('no tenemos dinero') en las redes sociales. La nueva ley tributaria había sido aprobada por el parlamento a principios de año, con polémica y a toda prisa, sin un proceso de consulta adecuado.

En **Panamá** los estudiantes **protestaron** durante tres días en julio contra el aumento de los precios de la electricidad. La protesta fue dispersada con gases lacrimógenos; sin embargo, el presidente anunció la revocación del

“

EN 2018 PANAMÁ
FUE UN CALDERO
DE PROTESTAS:
EL AÑO TAMBIÉN
FUE TESTIGO DE
UNA SERIE DE
IMPORTANTES
PROTESTAS
SINDICALES, QUE
DIERON COMO
RESULTADO UN
NUEVO CONVENIO
COLECTIVO DE
TRABAJO.

”

aumento propuesto. En 2018, Panamá fue un caldero de **protestas**: el año también fue testigo de una serie de importantes protestas sindicales, que dieron como resultado un nuevo convenio colectivo de trabajo. Sin embargo, en junio la policía armada impidió una protesta de maestros por la falta de pago de sus salarios, mientras que una manifestación realizada en marzo contra el aumento del costo de la vida en la ciudad de Colón provocó enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Los productores de arroz **protestaron** en octubre por la falta de pago de un fondo de compensación y, en abril, miembros de la comunidad Kuna Nega **protestaron** por la falta de servicios de agua. En diciembre se produjeron protestas en la ciudad de Divisa cuando se rompieron las negociaciones entre un grupo de agricultores y el gobierno. Los agricultores **bloquearon** los automóviles de los negociadores del gobierno, lo que provocó enfrentamientos con la policía.

Cuestiones relativas a la supervivencia también desencadenaron protestas en otros lugares, tales como **Djibouti**, donde en mayo se produjo una inusual **protesta** contra el nepotismo en la contratación de trabajadores en un puerto en construcción. La manifestación fue contrarrestada con violencia, que incluyó el uso de granadas de gas lacrimógeno, y se realizaron alrededor de 80 arrestos. También en **Ghana** el trabajo se colocó en el centro de las **protestas** de 2018. En febrero, se informó que la policía había agredido físicamente a personas que se estaban manifestando frente al Ministerio de Salud. Los manifestantes eran enfermeras desempleadas que se quejaban de la falta de empleos disponibles para ellas después de su capacitación. En marzo, las fuerzas de seguridad dispersaron violentamente una protesta de trabajadores de las minas de oro en la región occidental, según se informó, mediante el uso de gases lacrimógenos, gas pimienta y armas de fuego. La manifestación fue parte de una protesta mayor contra el despido de 2000 trabajadores de las minas de oro.

Vendedores ambulantes en **El Salvador** protestaron en noviembre después de que la policía intentara reubicarlos. Una persona murió y más de 20 resultaron heridas en enfrentamientos entre manifestantes y policías. En 2018, los problemas económicos y laborales quedaron particularmente de relieve en El Salvador: en octubre, los trabajadores municipales protestaron para exigir la reincorporación de 97 empleados que habían sido suspendidos por denunciar abusos laborales, en tanto que el país fue testigo de una **serie** de **protestas** contra la propuesta de privatización del servicio de agua. En junio, una de esas protestas, protagonizada por estudiantes, acabó en enfrentamientos con la policía y en el uso de gases lacrimógenos.

SERVICIOS ESENCIALES: AGUA Y TRANSPORTE

Las preocupaciones sobre el suministro y la calidad del agua también fueron factores desencadenantes de una serie de protestas que tuvieron lugar en 2018 en Irak y que fueron reprimidas con fuerza excesiva, a menudo letal. Cuando una serie de protestas sobre temas cotidianos estalló en varias ciudades de Irak en julio, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue usar municiones de plomo, gases lacrimógenos y cañones de agua, y asaltar y detener a manifestantes, periodistas y blogueros que cubrían las protestas. En total, se **informó** que al menos 13 personas murieron, 269 resultaron heridas y 757 fueron detenidas en el curso de la represión violenta de las protestas de julio, durante las cuales el acceso a internet sufrió grandes restricciones.

Las **protestas** de julio en Basora, relacionadas con el agua, el empleo y la corrupción, llevaron a que varios manifestantes y periodistas fueran agredidos y detenidos. Las protestas continuaron en Basora en agosto y septiembre, pero este último mes fue asesinado uno de los líderes de la protesta, el doctor Su'ad Al-Ali, jefe de Al-Weed Al-Alaiami para los Derechos Humanos. En julio, el abogado de derechos humanos **Jabbar Mohammed Al-Karm**, que se había ofrecido a defender a los detenidos durante las protestas, fue asesinado a tiros. La represión de julio no fue la primera en la cual se utilizó fuerza excesiva para reprimir protestas sobre asuntos esenciales en Irak: en marzo una **protesta** de empleados públicos contra las medidas de austeridad y la corrupción en Kurdistán fue dispersada con gases lacrimógenos y varios manifestantes fueron agredidos.

Sudáfrica es a menudo descrita como la capital mundial de la protesta, y 2018 fue testigo de múltiples expresiones de indignación ciudadana por los costos de los bienes básicos, la falta de acceso a servicios esenciales y la corrupción. En abril, los conductores de autobuses realizaron una huelga por motivos salariales que involucró a más de 17.000 trabajadores. Ese mismo mes se produjeron violentas **protestas** por temas de empleo, vivienda y

corrupción. La policía utilizó gases lacrimógenos y balas de goma contra manifestantes que arrojaban piedras e incendiaban vehículos. En mayo el poderoso Congreso de Sindicatos de Sudáfrica (COSATU) organizó una marcha de protesta por los derechos de los trabajadores y los problemas de transporte. Septiembre trajo consigo protestas contra la pobreza y manifestaciones contra la violencia de pandillas; nuevas **protestas** contra la delincuencia y la violencia se llevaron a cabo en octubre luego de que una mujer muriera en el fuego cruzado en un tiroteo entre pandillas.

Los manifestantes de Sudáfrica tienen la ley de su lado. Los derechos fundamentales de la sociedad civil fueron confirmados en noviembre en un fallo histórico del Tribunal Constitucional de Sudáfrica, que **dictaminó** que el derecho a protestar sin temor a ser arrestado o encarcelado debe ser respetado. El caso había sido presentado tras la detención, en 2013, de 21 miembros de la Coalición para la Justicia Social en Ciudad del Cabo. Los activistas se habían encadenado a las barandas de la sede municipal para protestar contra el mal estado de la red de saneamiento y otros servicios esenciales. El fallo anuló una disposición según la cual los organizadores de una protesta pueden ser criminalizados por no notificar a las autoridades locales de la realización de la protesta. Los jueces dictaminaron que el derecho de manifestación era “simplemente demasiado importante” para ser limitado de esta manera. Al tomar la decisión, los guardianes legales de Sudáfrica se pusieron firmemente del lado de la sociedad civil y defendieron el derecho de la ciudadanía a llamar la atención sobre los problemas de pobreza, servicios deficientes y corrupción que continúan dificultando sus vidas.

LA VIVIENDA URBANA: UN PROBLEMA EN ASCENSO

Dado que la población está cada vez más concentrada en las ciudades y la brecha de riqueza entre los muy ricos y todos los demás sigue aumentando ferozmente, no resulta sorprendente que en 2018 se observaran varios ejemplos de activismo y protesta centrados en temas de vivienda, incluido el problema



El movimiento sudafricano Reclaim the City se movilizó para resistir los desalojos injustos y la venta de tierras públicas, y para reclamar viviendas accesibles.

Crédito: Facebook, @ReclaimCT

de la gentrificación que crea nuevas dificultades para que la gente pueda vivir de forma cómoda y sostenible en sus ciudades. El movimiento *Reclaim the City* ('reclamar la ciudad') de Sudáfrica, por ejemplo, hace campaña por el derecho a una vivienda digna y asequible, y contra el desplazamiento de personas de las zonas centrales de las ciudades. En diciembre, su campaña obtuvo una notable **victoria** cuando el gobierno de Ciudad del Cabo acordó designar el sitio de un mercado en desuso para una urbanización residencial de ingresos mixtos, incluyendo viviendas sociales.

La escasez de viviendas es una preocupación creciente en Irlanda, y particularmente en la capital, Dublín, donde en octubre se realizó una concentración, '*Raise the Roof*' ('levantar el techo'), frente al parlamento irlandés. La movilización reunió a grupos que hacen campaña, a comunidades, sindicatos, agrupaciones de estudiantes y partidos políticos que convocaron a un cambio radical en la política de vivienda. Un mes antes, la policía junto a guardias de seguridad privados había **desalojado** a un grupo de manifestantes pacíficos que habían ocupado un edificio vacío en el centro de la ciudad. La campaña *Take Back the City* ('recuperar la ciudad'), organizadora de la ocupación, se quejó de la complicidad de la policía con el personal de seguridad privado, la falta de identificación de los guardias de seguridad privada y el uso de tácticas de mano dura en el desalojo: fuerza física, cinco personas detenidas y cuatro personas hospitalizados. Las protestas continuaron. En diciembre, más de mil personas se unieron a una **protesta** contra los desalojos forzosos en el área del Condado de Roscommon y miles **marcharon** en Dublín en una manifestación apoyada por OSC, sindicatos y grupos de acción comunitaria, para pedir al gobierno que tomara medidas urgentes para abordar el problema de la crisis de vivienda.

También en Taiwán se produjeron protestas contra los desalojos forzosos. Los residentes de la comunidad de Daugan, en la capital de Taiwán, Taipei, pueden sufrir un desalojo forzoso al **perder** una batalla legal por el derecho a la tierra con el Consejo de Asuntos de Veteranos. En dos **protestas** contra los desalojos realizadas en agosto, varios manifestantes fueron arrastrados, golpeados y retenidos por la policía en zonas cerradas con barricadas.

Incluso en contextos donde las protestas son poco comunes porque las condiciones son abiertamente represivas, la vivienda puede ser el problema que motiva a los ciudadanos a expresar su disenso. En la ciudad de Hyesan de **Corea del Norte**, uno de los países más cerrados del mundo, tuvo lugar en noviembre una extraordinaria **protesta**, luego de que los residentes de unas casas que habían sido demolidas para construir un bloque de apartamentos se enteraran de que las nuevas viviendas no serían para ellos sino para funcionarios del partido gobernante. Según se informó, los antiguos ocupantes de las viviendas fueron obligados a instalarse en tiendas de campaña en las afueras de la ciudad. Del mismo modo, en **Kazajstán**, donde el espacio para el disenso está **bajo asedio**, un grupo de mujeres **protestó** contra su inminente desalojo frente a la sede del gobierno en la capital, Astana. Las mujeres se quejaban de que no se estaba respetando un acuerdo anterior que les permitía comprar sus apartamentos y de que un nuevo propietario pretendía desalojarlas. Sin embargo, en lugar de escuchar sus reclamos, las autoridades acusaron a las mujeres de “pequeño vandalismo”, las multaron y las detuvieron.

Ante este aumento de las protestas sobre problemas de vivienda, cabe esperar que también aumenten las medidas para reprimirlas. Un nuevo decreto en materia de seguridad introducido en **Italia** en octubre **aumentó** las sanciones para las personas que ocupan edificios y para quienes organizan esas ocupaciones, una táctica popular entre los activistas del derecho a la vivienda.

LA PREOCUPACIÓN POR LA CORRUPCIÓN EN PRIMER PLANO

Pocos temas tienen más poder para sacar a la gente a las calles que la revelación de casos de corrupción a gran escala que involucran a las élites políticas y económicas. Las protestas contra la corrupción a menudo traen

consigo toda una gama de preocupaciones asociadas. La indignación ante la corrupción estuvo presente en muchos de los ejemplos anteriores, incluidos los de Irak, Sudáfrica, Sudán y Ucrania. Pero esos no fueron los únicos casos, tal como lo atestiguan los siguientes ejemplos.

RUMANIA Y MOLDAVIA: LA PREOCUPACIÓN POR LA CORRUPCIÓN SIGUE EN PIE

Rumania ha albergado desde **2017** protestas masivas ante intentos del gobierno de debilitar las penas por corrupción. Muchos acusaron al partido gobernante de tratar de introducir medidas blandas para que sus propios funcionarios corruptos salieran libres. Al igual que en Hungría y Polonia (*véase sección 3*), los funcionarios de la Unión Europea (UE) mostraron un gran interés en el caso, y **advirtieron** al gobierno de Rumania que podría ser sancionado por infringir las normas de la UE en caso de persistir con medidas que debilitaran los castigos por corrupción y la independencia judicial. Hipócritamente, el gobierno persistió en su intención de reducir los castigos, al tiempo que avanzaba en la **presentación** de una nueva ley para obligar a las OSC a cumplir normas **intrusivas** de transparencia y reporte, que incluirían el requisito de publicar el nombre de todo donante, y para facilitar el cierre de las OSC que no cumplieran con estos estándares.

Con el gobierno evidentemente decidido a imponer penas más leves para casos de corrupción, y ante la perspectiva de que el líder del partido gobernante, **Liviu Dragnea**, fuera a la cárcel cuando una condena por abuso de funciones se sumó a una condena anterior por fraude electoral, las protestas se **encendieron** nuevamente en los primeros meses de 2018. En enero, aproximadamente 50.000 personas marcharon en la capital, Bucarest. Las protestas redoblaron luego de que **Laura Codruta Kovesi**, jefa

“
 EL NIVEL DE
 INDIGNACION
 PÚBLICA SOSTENIDA
 SE EVIDENCIÓ EN
 EL HECHO DE QUE
 MUCHOS MIEMBROS
 DE LA EXTENSA
 DIÁSPORA RUMANA
 VIAJARON PARA
 PARTICIPAR DE LAS
 PROTESTAS.

”

de la agencia rumana anticorrupción, fuera expulsada de su cargo en julio. Se estima que unas 100.000 personas participaron en una nueva protesta contra la corrupción en Bucarest en agosto; también se llevaron a cabo protestas en otras ciudades rumanas. El nivel de indignación pública sostenida se evidenció en el hecho de que muchos miembros de la extensa **diáspora** rumana viajaron para participar de las protestas. La pobreza persistente, en parte alimentada por la corrupción, ha llevado a muchos rumanos a buscar trabajo en el extranjero para enviar dinero a sus hogares. Las protestas de agosto en Bucarest fueron reprimidas. Cuando un grupo intentó romper un cordón policial, las fuerzas de seguridad reaccionaron con fuerza indiscriminada y desproporcionada, utilizando gases lacrimógenos, gas pimienta y cañones de agua. Más de **400 personas** requirieron de tratamiento médico, y una persona murió más tarde en el hospital, según se informó, a causa de la inhalación de gases lacrimógenos. Los periodistas fueron especialmente agredidos, lo cual generó la sospecha de que los medios de comunicación, y los extranjeros en particular, estaban siendo atacados para obstaculizar el flujo de información internacional y evitar al gobierno la vergüenza por su débil enfoque en relación con la corrupción.

En un signo de la división en la cima del gobierno, el presidente Klaus Iohannis condenó la acción policial como **desproporcionada**, pero la primera ministra Viorica Dancila, a su vez, lo acusó de incitar al público. Los políticos del partido gobernante continuaron adoptando posiciones de línea dura, afirmando que la violencia policial era necesaria, colocando el foco sobre la sociedad civil y acusando a los organizadores de las protestas de intentar un golpe de Estado. Afirmaron que los organizadores de la protesta habían planificado la violencia y solicitaron una investigación de la financiación de las protestas. En contra de estas posiciones, más de 650 personas presentaron denuncias contra la policía; estas parecieron confirmarse en septiembre, cuando el jefe de la policía antidisturbios y tres altos funcionarios fueron **acusados** de ejercer violencia contra los manifestantes. En desafío a la violencia, tras los enfrentamientos se llevaron a cabo **nuevas manifestaciones**.

Cuando otro escándalo de corrupción estalló en noviembre, la respuesta del gobierno fue típicamente evasiva. El escándalo de #TeleormanLeaks **reveló vínculos** entre altos funcionarios del partido gobernante, incluido Liviu Dragnea nuevamente, y Tel Drum, una empresa de construcción de carreteras bajo investigación por acusaciones de uso fraudulento de fondos de la UE. La **reacción** del gobierno consistió en ordenar al proyecto RISE, el canal de periodismo de investigación rumano que había publicado la historia, que revelara sus fuentes, ofreciendo un ejemplo temprano del modo en que los estados podrían abusar del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE para reprimir las críticas. Los ciudadanos rumanos merecen una respuesta más responsable de su gobierno.

La vecina de Rumania, **Moldavia**, también fue testigo de continuas protestas contra la corrupción en 2018. En agosto, decenas de miles de personas **manifestaron** en la capital, Chişinău, contra la corrupción gubernamental y los presuntos vínculos con el crimen organizado. La ira por la corrupción ha sido un fenómeno generalizado en Moldavia desde 2015, cuando se **reveló** que en 2014 el equivalente a una octava parte del PBI de Moldavia había sido desviado a cuentas extranjeras de tres bancos. Ese déficit tuvo que ser cubierto con fondos de las arcas estatales, lo cual puso en evidencia que la corrupción sistemática afecta directamente la capacidad de las personas para acceder a los servicios esenciales que se supone que el estado debe proporcionar. La indignación de la gente por la corrupción creció durante 2018, particularmente después de que una sentencia judicial **anulara** la victoria del candidato de la oposición en la elección de alcalde de Chişinău en junio, provocando protestas que duraron varios días. El fallo, que dejó a un alcalde interino en el cargo hasta que se celebraran nuevas elecciones en 2019, se fundamentó en la apreciación de que ambos candidatos habían infringido las reglas electorales haciendo campaña en las redes sociales el día de las elecciones. En un símbolo de la polarización y el enraizamiento del poder de intereses corruptos, en agosto tuvieron lugar contraprotestas organizadas por simpatizantes del político y empresario Ilan Sor, presuntamente vinculado al fraude bancario de 2014.

MALAWI: PAGOS POLÍTICOS EN UN PAÍS POBRE

Malawi fue sacudido por el “**el escándalo K-4 mil millones**” que se desató en marzo. Se dijo que el gobierno había canalizado fondos de una línea presupuestaria secreta hacia los miembros del parlamento que le habían ayudado a derrotar las propuestas de reforma electoral. En vísperas de una elección programada para mayo de 2019, esto generó la sospecha de

que el gobernante Partido Democrático Progresista (DPP) estaba tratando de aumentar sus probabilidades de ganar. En un país que es a menudo clasificado como uno de los más pobres de África, este uso aparentemente generoso de los recursos del estado generó irritación pública, y en abril las revelaciones provocaron protestas.

Timothy Pagonachi Mtambo, del **Centro de Derechos Humanos y Rehabilitación**, relata los antecedentes del escándalo y las protestas de abril:

Las protestas se produjeron en respuesta al escándalo de K4-mil millones, un esquema a través del cual miembros selectos del parlamento, en su mayoría representantes del DPP, recibieron pagos en forma de “agradecimiento” del estado por rechazar un proyecto progresista de ley de reforma electoral. Este escándalo planteó temas serios de gobernanza y rendición de cuentas, incluido el tema de la confianza que merecen quienes hacen uso del dinero de los contribuyentes y traicionan la confianza pública.

Las protestas nacionales del 27 de abril exigieron una mayor transparencia y rendición de cuentas del gobierno liderado por el DPP. Las marchas fueron encabezadas por el Centro de Derechos Humanos y Rehabilitación y agrupaciones asociadas, bajo la bandera de la Coalición de Defensores de Derechos Humanos de Malawi. Las protestas involucraron a los patriotas malauíes decepcionados con el escándalo de 4 mil millones de Kwacha (aproximadamente 390 millones de dólares) y el deterioro de la calidad de la gobernanza en Malawi. Esto se evidencia en el abuso de la prerrogativa ejecutiva, la manipulación de los recursos públicos destinados a satisfacer los intereses de los malauíes, el alto costo de la vida, el nepotismo, los niveles de corrupción y el abuso del dinero de los contribuyentes para recompensar a los amigos políticos del régimen. A esto se sumó el descontento por los continuos apagones eléctricos, las alarmantes tasas de desempleo entre los jóvenes y la escasez de medicamentos y personal médico en los hospitales, entre muchos otros problemas.

Las protestas continuaron en un ambiente amenazador, como relata Timothy:

Justo un día antes de las manifestaciones, partidarios del DPP recorrieron las ciudades con sus colores partidarios, difundiendo la violencia y el odio, diciéndoles a las personas que no participaran en la marcha. Amenazaron con tomar represalias contra cualquiera que participara en las protestas del 27 de abril. Esto se hizo en presencia de altos funcionarios del DPP y el Ministro de Información. Algunos ciudadanos tuvieron tanto miedo que desertaron. Otros miles que recibieron la propaganda del DPP desafiaron las amenazas y participaron del día de protesta.

Las protestas fueron muy concurridas. Esto fue histórico y una indicación de que los malaués están cansados de la impunidad y la corrupción. En total participaron unos 35.000 manifestantes, la mayoría de los cuales, más de 13.000, se movilizaron en la capital, Lilongwe.

Durante las protestas, particularmente en Lilongwe, la policía hizo esfuerzos para provocar violencia de parte de los manifestantes, incluso impidiendo que los manifestantes marcharan hacia las oficinas centrales del gobierno. Afortunadamente, los ciudadanos se mantuvieron en calma.

Los manifestantes lograron entregar una petición a las autoridades, pero el gobierno no parecía estar dispuesto a escuchar. En lugar de reconocer las preocupaciones de la ciudadanía, el presidente Peter Mutharika acusó a los partidarios de la protesta de unirse a una insurrección contra el gobierno. Mientras tanto, a medida que se acercaban las elecciones, a principios de 2019 se observó un evidente **incremento** de los niveles de violencia por motivos políticos. Los ciudadanos de Malawi, entretanto, mantienen sus expectativas de una mejor clase política.

GUATEMALA, HAITÍ, REPÚBLICA DOMINICANA: ESTADOS DE IMPUNIDAD

La corrupción sigue siendo un gran problema político en **Guatemala**. El presidente Jimmy Morales siempre ha estado en conflicto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, y en particular con su jefe, Iván Velásquez. Las investigaciones de la CICIG, en colaboración con el Fiscal General de Guatemala, alimentaron la ira pública y las protestas masivas que llevaron a la **destitución** del anterior presidente, Otto Pérez Molina, quien permanece detenido bajo acusaciones de corrupción. En 2015, tras beneficiarse de las investigaciones de la Comisión para llegar al poder, el presidente Morales se mostró cada vez más reacio a someterse a escrutinio, y hizo un primer intento de expulsar a Velásquez de Guatemala en 2017, luego de que la Comisión comenzara a investigar al presidente y a sus asociados por el presunto financiamiento ilegal de la campaña para las elecciones de 2015.

Los problemas se intensificaron en agosto, cuando el presidente Morales **anunció** que su gobierno no renovarían el mandato de la CICIG y declaró que no se permitiría a Velásquez regresar a Guatemala. En un movimiento que no auguraba nada bueno, se **enviaron** vehículos militares para rodear la sede de la Comisión. La decisión supone que, así las cosas, el mandato de la CICIG expiraría en septiembre de 2019. En septiembre de 2018, sin embargo, el Tribunal Constitucional de Guatemala revocó la decisión y ordenó al presidente Morales que permitiera el reingreso de Velásquez al país. El gobierno rechazó la decisión del tribunal y declaró que no aceptaría a Velásquez como jefe de la CICIG. Miles de personas salieron a las calles para **protestar** contra la decisión y sectores de la carretera Panamericana fueron **bloqueados** en una protesta de una semana encabezada por

comunidades indígenas. Los manifestantes fueron recibidos por una fuerte presencia militar y policial. El Ombudsman de Guatemala, Jordán Rodas Andrade, denunció la fuerte presencia militar durante las protestas y afirmó que su objetivo era intimidar a los manifestantes. A raíz de su solicitud, el Tribunal Constitucional ordenó al gobierno que respetara el derecho de las personas a protestar pacíficamente.

El gobierno respondió dirigiendo su ira contra Jordán Rodas, intentando destituirlo de su cargo. Anteriormente, el Congreso Nacional lo había interrogado por su participación en una marcha en el Día Internacional de la Mujer, que según se afirmó era en contra de la religión católica. La sociedad civil respondió **uniéndose** en su defensa y la Conferencia Episcopal de Guatemala condenó las distorsiones del gobierno. Jordán Rodas también **informó** que había tratado de reunirse con el presidente Morales y con OSC para tratar la falta de protección para los defensores de los derechos humanos en Guatemala, pero sus intentos habían sido rechazados.

Con un gobierno cada vez más paranoico en relación con las consecuencias de toda investigación, no resultó extraño que una misión internacional de la sociedad civil a Guatemala, llevada a cabo en agosto, descubriera un patrón de violencia **sistemática** contra los defensores de derechos humanos y un clima de impunidad, en evidente **aumento** durante 2018. El año fue testigo de ataques y **asesinatos** de activistas LGBTQI, defensores de los derechos de los pueblos indígenas y **periodistas**, así como de una ola de **sentencias** judiciales en virtud de las cuales defensores de derechos humanos fueron condenados a largas penas de cárcel sobre la base de acusaciones espurias. A medida que aumentan los problemas, un gobierno que es cuestionado por acusaciones de corrupción no puede sino tomar medidas enérgicas contra quienes buscan exponer sus excesos.

Las preocupaciones por la corrupción también quedaron en primer plano en **Haití**, donde se llevaron a cabo **protestas** anti-corrupción en todo el país en noviembre, luego de que se hiciera pública la acusación de que los políticos habían robado miles de millones de dólares depositados en Haití por el programa **venezolano** Petrocaribe. Si bien muchos funcionarios de alto rango estuvieron implicados en el escándalo, ninguno fue procesado, lo cual dio la pauta de una impunidad arraigada. El presidente Jovenel Moise fue acusado de bloquear la acción. Como consecuencia de enfrentamientos con la policía, al menos seis personas murieron, lo cual provocó una indignación pública aun mayor.

Jean Marc-nel Etienne, de la **Union of Brothers for Alternative Integrated Development**, describe las protestas y sus orígenes:

Los manifestantes preguntaban: “¿Dónde está el fondo Petrocaribe?” Demandaban una investigación sobre la malversación de fondos del programa venezolano Petrocaribe, que



La ciudadanía guatemalteca continuó protestando contra la arraigada corrupción estatal tras obtener la renuncia del presidente en 2015.

Crédito: Fabricio Alonzo/Anadolu Agency/Getty Images

suministró petróleo crudo en términos muy generosos a las naciones del Caribe y América Central. En 2017, el parlamento haitiano publicó un informe en el cual culpaba a ex funcionarios de alto rango por irregularidades en el uso de estos fondos, pero no hubo procesamientos judiciales, razón por la cual los manifestantes exigieron el castigo para quienes malversaron fondos del Petrocaribe. En otros países de la región, estos fondos fueron utilizados para proyectos de infraestructura, mientras que en Haití terminaron en los bolsillos de alguien. Según varios analistas, el caso Petrocaribe es la mayor operación de corrupción y apropiación indebida de fondos públicos y el mayor delito financiero en la historia de Haití. Los responsables deben ser juzgados y enviados a prisión.

Muchos jóvenes se movilizaron para exigir acción. Si bien la lucha por arrojar luz sobre el uso fraudulento del fondo Petrocaribe no nació en las redes sociales, sino que fue activada por un informe parlamentario, el movimiento creció considerablemente gracias al activismo en línea, con el hashtag #PetrocaribeChallenge marcando tendencia.

Este desafío desbordó las redes sociales y adquirió una nueva dimensión al tomar las calles. En varios lugares de Haití y en la diáspora haitiana en el extranjero, miles de manifestantes marcharon, y las cifras aumentaron dramáticamente cada día. Armadas con carteles, pancartas y consignas, entonando cánticos hostiles a las autoridades políticas y judiciales, muchas personas desafiaron con vehemencia al gobierno para que arrojara luz sobre el uso de los fondos de Petrocaribe.

El 17 de octubre, decenas de miles de personas protestaron, en su mayoría de manera pacífica, en casi todas las ciudades importantes de Haití. El evento reunió a una amplia gama de personas. Hubo enfrentamientos violentos entre la policía, que disparó varias veces con munición real, balas de goma y gases lacrimógenos, y

los manifestantes, que respondieron arrojando piedras y botellas y preparando barricadas en llamas. A mediados de noviembre, nuevamente, las protestas tuvieron lugar día tras día con violentos enfrentamientos con la policía. Esta vez, las protestas también se convirtieron en una especie de referéndum sobre el presidente, ya que muchos miembros de la oposición política aprovecharon las movilizaciones para exigir su destitución.

El 18 de noviembre se cometieron crímenes indecibles. Muchas personas murieron, además de las que habían muerto en protestas anteriores, incluidos niños pequeños, y varias personas fueron asesinadas en sus hogares.

Después de las muertes en esas protestas, una **huelga general** paralizó la mayor parte de Haití y las protestas **continuaron**, lo que obligó al presidente, que no había respondido a las protestas anteriores y a las crecientes **demandas** de que renunciara, a pedir la calma. Pero cuando los líderes de la oposición aprovecharon las protestas para sus propios fines, la cuestión pasó a ser cómo hacer para que el impulso de la protesta generara un cambio real, en lugar de la mera rotación de líderes corruptos que con demasiada frecuencia ha caracterizado el aparente cambio político en Haití. Según Jean, la necesidad de un cambio real, en un contexto donde la mala administración hace de Haití el país más pobre del hemisferio occidental, es profunda:

¿Es esta una situación prerrevolucionaria? Si es así, ¿a quién beneficiará? Si examinamos cuidadosamente algunos periodos cruciales en la historia de las revoluciones, notamos que, a diferencia de las revoluciones del pasado, las revoluciones modernas las hace una minoría en contra de la mayoría. De hecho, cuando la gente habla de “movilizar a las masas”, solo tiene un objetivo: inmovilizarlas. Cuando agitadores, instigadores, líderes, autoproclamados “líderes del pueblo”, charlatanes, demagogos y falsos profetas han tenido éxito en nombre de la democracia, es decir, cuando esta mayoría ha

sido golpeada por una parálisis general y se ha quedado petrificada, los frutos de la revolución han caído en sus manos como una piedra suelta.

Si tomamos en cuenta la realidad de Haití, y en particular el nivel de desigualdades sociales, podemos decir que no se están cumpliendo las condiciones para la democracia. Hemos sido burlados por nuestros propios líderes. La población haitiana ha quedado abandonada a su suerte. Parece que se han tomado muchas medidas para mejorar nuestra situación, pero todas se quedaron en el papel sin ningún impacto en la vida cotidiana de la población.

La situación continuó complicada a principios de 2019. Tras la publicación de un informe sobre el escándalo de corrupción, en febrero de 2019 nuevas **protestas** que involucraron a miles de personas fueron reprimidas con una violencia que causó la muerte de al menos siete personas.

Mientras tanto, al otro lado de la frontera, en **República Dominicana**, la ira por la corrupción también siguió haciendo olas en 2018. En 2017, el Movimiento Marcha Verde **movilizó** a miles de personas contra la impunidad por la corrupción, a la par de las revelaciones del vasto y profundo escándalo de corrupción **Odebrecht**, que implicó a gobiernos de toda América Latina, y en especial en **Brasil** (*véase sección 3*). El Movimiento Marcha Verde mantuvo vivo el problema en 2018: en agosto miles de personas **marcharon** en la capital, Santo Domingo, para exigir el fin de la impunidad. En enero también se produjo una **protesta** contra el escándalo Odebrecht en **Panamá**.

LA ACCIÓN SINDICAL EN 2018

Como lo sugieren los anteriores ejemplos de Gabón, Guinea y Panamá, entre otros, 2018 fue un año en el cual los sindicatos demostraron su fuerza organizando acciones colectivas y sumando victorias en temas de economía y gobernanza en **todo el mundo**. El poder de la acción colectiva también

fue celebrado en las numerosas movilizaciones convocadas en ocasión del Primero de Mayo en todo el planeta, y los trabajadores aprovecharon la oportunidad para exigir mejores salarios y condiciones de trabajo. **Asia** fue un hervidero de protestas. En **Taiwán**, por ejemplo, los manifestantes pidieron un aumento salarial del 10% y mejores condiciones de trabajo; en Hong Kong exigieron un salario mínimo; y en **Filipinas** pidieron que se pusiera fin a la práctica de los contratos de trabajo a corto plazo, una promesa formulada por el presidente Rodrigo Duterte en la campaña de 2016 y no cumplida. En una demostración de que las demandas de mejores salarios y condiciones laborales son esencialmente políticas porque cuestionan el poder económico y político arraigado, en muchos contextos las protestas del Primero de Mayo fueron reprimidas o experimentaron reacciones violentas. Entre ellas se contaron las detenciones de activistas de la discapacidad en **Rusia**, escaramuzas de la policía con manifestantes en **Turquia** y la prohibición y uso de la policía antidisturbios para detener una marcha por un salario mínimo más alto en **Camboya**.

Fiji fue escenario de un triunfo de los derechos laborales en enero, cuando los trabajadores aeroportuarios, que habían sido expulsados de su lugar de trabajo tras asistir a una reunión sobre mala administración en diciembre de 2017, obtuvieron una **victoria** judicial que les permitió regresar a sus puestos sin repercusiones y recibir pagos atrasados. Antes de que se tomara esta decisión, miles de personas marcharon en apoyo de los trabajadores en una manifestación organizada por el Congreso de Sindicatos de Fiji (FTUC). El Congreso había sido convocado para organizar una huelga nacional en apoyo de los trabajadores.

Sin embargo, quienes apoyaron a los trabajadores aeroportuarios sufrieron las consecuencias. **Netani Rika**, editora de la revista Islands Business, fue interrogada por la policía luego de escribir un artículo sobre la disputa. El líder del sindicato de trabajadores del aeropuerto, **Jay Dhir Singh**, fue declarado culpable de escandalizar a los tribunales después de acusar al poder judicial de estar controlado por un ministro; en junio fue condenado a tres meses de cárcel. El FTUC también vio rechazadas sus solicitudes de permiso



En mayo los sindicatos griegos convocaron a un paro de un día contra las anunciadas medidas de austeridad.

Crédito: Milos Bicanski/Getty Images

para realizar protestas en varias ocasiones, incluidas tres oportunidades en febrero, **abril** y septiembre; a menudo a último momento y sin que se proporcionaran razones válidas, aparte del motivo evidentemente espurio de que el jefe del FTUC estaba siendo investigado.

En febrero, el FTUC expresó su preocupación por la decisión del gobierno de imponer contratos individuales por tiempo determinado para los funcionarios públicos, poniendo fin a la negociación colectiva. Esto fue condenado por los sindicatos como una reducción de los derechos laborales y una forma de **socavar** el poder sindical colectivo que tan importante rol ha desempeñado a la hora de llamar al gobierno de Fiyi a rendir cuentas de su conformidad con las normas de derechos humanos. En vísperas de la **ferozmente disputada** elección de noviembre (*véase sección 3*), en la cual el partido gobernante apenas logró mantener su mayoría, la brecha entre el gobierno y los sindicatos se amplió. Hacia septiembre, el FTUC **afirmaba** que la situación de los derechos laborales en Fiyi nunca había sido tan mala y que los sindicatos estaban siendo atacados.

En septiembre los trabajadores del sector público se declararon en **huelga** en **Costa Rica**, en rechazo de un paquete de medidas de austeridad que incluía reducciones de beneficios para los trabajadores del sector público y tributación sobre bienes y servicios que anteriormente estaban exentos. La huelga, considerada la más grande en muchos años, duró varios días antes de que el gobierno otorgara concesiones a los sindicatos y acordara no tomar ninguna medida de represalia contra los huelguistas. Estudiantes de la Universidad de Costa Rica protestaron en apoyo de la huelga. Cuando los efectivos policiales irrumpieron en el campus y se produjeron enfrentamientos y arrestos, tanto las autoridades universitarias como los estudiantes mostraron su rechazo ante esta violación de la autonomía universitaria, y el gobierno acordó crear una comisión para investigar el incidente. Sin embargo, las protestas se volvieron más difíciles el mes siguiente, cuando varios diputados firmaron un proyecto de ley que buscaba multar a los empleados por hacer huelga si su empleador presentaba una petición para declarar a la huelga ilegal. Los tribunales costarricenses tienen

antecedentes de haber declarado ilegales a huelgas por el hecho de no considerarlas directamente relacionadas con cuestiones laborales.

Grecia ha sido testigo de una gran acción sindical desde la crisis económica de 2008 y la introducción de estrictas medidas de austeridad que redujeron drásticamente los servicios públicos y provocaron una subida vertiginosa del desempleo. Se estima que desde entonces ha habido alrededor de 50 huelgas generales en Grecia. En **noviembre**, los funcionarios públicos hicieron una huelga y protestaron fuera del parlamento por sus salarios y pensiones, y los trabajadores municipales protestaron ante recientes muertes de trabajadores. El mes anterior se había producido una huelga que había cerrado la icónica Acrópolis en protesta por la posible privatización de varios monumentos importantes. Pero la acción sindical no podrá sino volverse más difícil tras la introducción de **nuevas reglas** que en enero elevaron el umbral de votos para convocar huelgas: en virtud de la ley, los sindicatos requerirán del apoyo de la mitad de sus miembros en lugar de la tercera parte, como se requería anteriormente.

GUINEA: PROTESTAS DE TRABAJADORES COMBINADAS CON IRA ELECTORAL

En **Guinea**, en 2018 al enojo público por los bajos niveles salariales y las malas condiciones de trabajo se sumó la furia de la oposición ante los resultados de las elecciones locales de febrero. Una huelga de maestros cerró las escuelas durante un mes, entre febrero y marzo, y recién terminó cuando el gobierno acordó aumentar los salarios de los maestros además de ceder a otras demandas, incluida la garantía de que los participantes en la huelga no serían procesados ni castigados. Durante la huelga, miles de

personas se unieron a una protesta para exigir que se levantara la medida, pero cuando muchos actores de la sociedad civil apoyaron la huelga de maestros, el presidente les **acusó** de intentar desestabilizar el país. Problemas cruciales quedaron sin resolver y provocaron una nueva huelga de maestros en octubre.

En Guinea, las huelgas docentes apuntaban a temas más amplios. En febrero, la Unión General de Trabajadores de Guinea (UGTG, por sus siglas en inglés) convocó a una huelga general para protestar por la mala gestión de las contribuciones al Fondo Nacional de Seguridad Social, así como por la indiferencia del estado ante los accidentes y peligros laborales, la politización de la administración y los obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos sindicales. Pero el gobierno de Guinea también exhibió su desconfianza hacia la acción sindical en mayo, cuando **Aboubacar Sidiki Mara**, subsecretario general de la UGTG, fue arrestado mientras investigaba las condiciones de trabajo en la ciudad minera de Boké. En junio fue sentenciado a seis meses de prisión, con cuatro meses de suspensión, por “provocar una reunión ilegal”. Mientras tanto, cuando los trabajadores portuarios protestaron contra la entrega de una concesión a una empresa turca, las fuerzas de seguridad los dispersaron con gases lacrimógenos y arrestaron al líder del sindicato, que fue sentenciado a 13 días de cárcel por difamación. Estas acciones contra los líderes sindicales revelan que el gobierno está endureciendo su posición frente a los sindicatos por sus varias protestas y huelgas, en lugar de negociar con ellos para ayudar a lograr el cambio necesario para que las protestas sean menos necesarias.

Los conflictos políticos formaron el telón de fondo de las protestas sindicales de Guinea. En febrero se celebraron elecciones locales por primera vez desde 2005 y el partido gobernante ganó la mayoría de los escaños. El partido de la oposición, que ganó en la capital, Conakry, disputó los resultados, alegando fraude. Tras el anuncio de los resultados se produjeron enfrentamientos entre simpatizantes de las dos partes; hubo viviendas incendiadas y al menos siete personas muertas. La violencia postelectoral y el uso de **fuerza** excesiva y letal por parte de los servicios de seguridad fue condenada por la

sociedad civil nacional e internacional. La disputa se prolongó hasta 2018, con protestas de “ciudad muerta” desplegadas por la oposición en Conakry. Cuando las negociaciones entre el gobierno y la oposición fracasaron en mayo, estalló la violencia entre la oposición, por un lado, y los partidarios del partido gobernante y las fuerzas de seguridad, por el otro, con un saldo de al menos 15 muertos. Fue en este ambiente polarizado que un gobierno acorralado arremetió contra la acción sindical.

BOLIVIA: ACCIÓN SINDICAL EN UN CONTEXTO POLARIZADO

El contexto de **Bolivia** se ha caracterizado por la polarización política en torno a la evidente determinación del presidente en ejercicio, Evo Morales, de presentarse nuevamente a elecciones en octubre de 2019, en desafío tanto de la constitución como del resultado de un **referendum** sobre el tema realizado en 2016 (*véase sección 3*). Pero esa no fue la única noticia de 2018 en Bolivia, que también fue testigo de una importante huelga de trabajadores de la salud. **Javier Gómez Aguilar**, del **Centro de Estudios para el Trabajo y el Desarrollo Agrario**, describe la acción sindical:

Una movilización relevante de 2018, en rigor iniciada a fines de 2017, fue la de los médicos. Los médicos hicieron una larga huelga y numerosas protestas contra un nuevo artículo del Código Penal que, mediante procesos casi administrativos, imponía penas de entre 5 y 9 años de cárcel por negligencia y mala praxis.

Los trabajadores de la salud estuvieron movilizados durante todas las fiestas de fin de año de 2017 y hasta el 21 de febrero, fecha en que la ciudadanía se moviliza para mantener en la agenda el hecho de que en 2016 el presidente Evo Morales perdió el referéndum con el cual pretendía obtener la prerrogativa de postularse a una nueva reelección.



Los trabajadores de la salud en huelga se movilizaron en varias ciudades bolivianas.

Crédito: Facebook, Colegio Médico de Santa Cruz Bolivia.

Dado lo polarizado del contexto, la violencia que tuvo lugar contra los trabajadores de la salud tal vez no fuera sorprendente, como lo relata Javier:

*En el curso de las protestas de los médicos hubo episodios de enfrentamiento, violencia y persecución. En enero la policía **irrumpió violentamente** en el Convento de San Francisco de la capital, La Paz, para arrestar a médicos y estudiantes de Medicina que se habían refugiado allí ante la represión que enfrentaron cuando intentaron bloquear el paso del Rally Dakar, que atraviesa Bolivia. Esto fue extraordinario: históricamente, la iglesia en Bolivia cobijó diversas protestas, incluso huelgas de hambre contra la dictadura, y hasta ahora nunca había habido ninguna intervención semejante. Actualmente ya casi no quedan espacios a salvo de la represión estatal.*

En el caso de los médicos, la movilización cedió cuando el Código Penal fue abrogado.

Si bien los trabajadores de la salud finalmente salieron victoriosos, la forma en que el estado encaró sus protestas arrojó luz sobre la mentalidad politizada y polarizada con que el partido gobernante ha llegado a hacer frente a toda crítica:

Ante todas las movilizaciones se observa el mismo comportamiento del aparato estatal, que incluso ante demandas sectoriales que de por sí no necesariamente cuestionan al gobierno, deja crecer el conflicto, alimenta la polarización, espera a que inevitablemente se produzcan desórdenes y enfrentamientos con la policía, y después acusa de la violencia, detiene y procesa a los dirigentes de los sectores movilizados. Actores de la oposición se colocan del lado de estos movimientos con el argumento de que el gobierno no los está escuchando, y entonces conflictos que son inicialmente sectoriales o territoriales terminan siendo tratados como intentos de desestabilización orquestados por la oposición.

Mientras tanto, en el vecino **Paraguay** miles de personas de varios sindicatos **marcharon** en junio para protestar contra una propuesta del gobierno de cambiar las regulaciones sobre las pensiones. El año también fue testigo de protestas de los **agricultores** por la reforma agraria y de una **protesta** que tuvo lugar en agosto, con los estudiantes al frente, contra la corrupción y la evidente impunidad entre los funcionarios estatales.

“

HISTÓRICAMENTE, LA IGLESIA EN BOLIVIA COBIJÓ DIVERSAS PROTESTAS, INCLUSO HUEGAS DE HAMBRE CONTRA LA DICTADURA, Y HASTA AHORA NUNCA HABÍA HABIDO NINGUNA INTERVENCIÓN SEMEJANTE.

”

LA REACCIÓN CONTRA LA ACCIÓN SINDICAL

En varios de los ejemplos anteriores, los estados restringieron el potencial de la acción colectiva. En 2018 la acción sindical fue contrarrestada con represión estatal violenta en muchos países.

Swazilandia, o eSwatini, como la **rebautizó** unilateralmente en abril el rey Mswati III – el único monarca absoluto de África – enfrentó protestas sindicales en 2018, las cuales fueron reprimidas. En agosto, los **maestros** salieron a las calles para protestar porque el gobierno no ofreció aumentos salariales acordes al costo de vida a los funcionarios públicos. Cuando los manifestantes lanzaron piedras y bloquearon carreteras, las fuerzas de seguridad dispararon municiones de plomo, una respuesta desproporcionada. Otras protestas en **septiembre**, en apoyo a una huelga de maestros que exigían un aumento salarial que cubriera el costo de la vida, fueron reprimidas con granadas de aturdimiento utilizadas para dispersar a las multitudes. Más allá de los salarios, las cuestiones más amplias que motivaron a los manifestantes incluyeron la educación, la atención médica, las pensiones y los desalojos arbitrarios. En 2018 también se vio a los trabajadores del sector público protestar cuando se les informó que su fondo de pensiones había sido desbaratado para contribuir a pagar las lujosas celebraciones del **cumpleaños número 50 del** Rey Mswati, un escándalo en un país donde una de cada tres personas depende de la ayuda alimentaria. También se utilizaron granadas de aturdimiento, gases lacrimógenos y balas de goma en junio, contra una **protesta** de trabajadores que denunciaban presunta corrupción en la administración del fondo nacional de pensiones.

Mientras tanto, en la cercana **Lesotho**, en agosto una **huelga** de trabajadores de una fábrica abrió paso a una protesta en reclamo de un aumento salarial que fue reprimida con balas de goma y cañones de agua. Las protestas continuaron en medio de una atmósfera tensa.

Los trabajadores agrícolas azucareros en huelga en la ciudad de Sagay, **Filipinas**, pagaron un precio mortal en octubre. Un grupo de **nueve** miembros de la Federación Nacional de Trabajadores del Azúcar fue abatido a tiros en una plantación mientras participaba en el primer día de una ocupación de tierras. Filipinas tiene un patrón tristemente establecido de asesinatos de trabajadores agrícolas, así como de aquellos que desafían el poder de las industrias extractivas y promueven el derecho a la tierra; la impunidad por estos asesinatos también está arraigada. El defensor del medio ambiente y de los derechos indígenas **Ricardo Mayumi** fue **asesinado a tiros** en marzo. El mes siguiente, el padre Mark Anthony Ventura, sacerdote, activista contra la minería y líder del Movimiento Campesino Ifugao que se oponía a un proyecto hidroeléctrico, fue asesinado a tiros. El mismo destino esperaba a Beverly Geronimo, integrante de la Asociación de Agricultores de Tabgan Guangan y activista anti-minería, asesinada en mayo. El estado de impunidad se evidenció aún más en noviembre, cuando el abogado de derechos humanos **Benjamin Ramos**, que defendía los derechos de los campesinos y proporcionaba asesoramiento legal gratuito a las familias de los nueve trabajadores azucareros asesinados, fue asesinado a tiros por hombres armados que iban en motocicletas.

Los ataques contra activistas en las Filipinas vienen desde arriba: en febrero, el gobierno **presentó** en la corte una petición para calificar a 600 activistas y críticos del gobierno como **terroristas**. La lista incluía a Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, una ciudadana filipina que ha criticado al gobierno.

Cristina Palabay, de la **Alianza Karapatan para el progreso de los derechos de los pueblos**, describe los desafíos que enfrentan los defensores de derechos humanos en Filipinas:

Hombres y mujeres que defienden los derechos humanos enfrentan amenazas crecientes y constantes y ataques directos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y otras horribles violaciones de los derechos humanos. Ser defensor de los derechos

humanos en un país como Filipinas significa ponerse en la línea de fuego, ya que las mismas violaciones de derechos contra las que se levantan los defensores de derechos humanos son cometidas contra ellos. Los blancos más frecuentes son los activistas de base, agricultores, trabajadores, los pueblos indígenas y los miembros de organizaciones populares y de masas. La impunidad que prevalece por los delitos cometidos contra ellos perpetúa la ausencia de rendición de cuentas por los abusos cometidos contra los derechos humanos.

En el trascurso de la farsa que es la **guerra contra las drogas** del gobierno filipino, su programa de contrainsurgencia y la **continuidad de la ley marcial** en la región de Mindanao, los asesinatos extrajudiciales cometidos o incitados por las fuerzas estatales han aumentado. Desde 2001 hasta diciembre de 2018, Karapatan documentó el asesinato de 760 defensores de derechos humanos, la mayoría de ellos de pueblos rurales e indígenas, junto con líderes y miembros de sindicatos. Bajo el gobierno del presidente Duterte, por lo menos un defensor de derechos humanos es asesinado cada semana. En Karapatan hemos perdido a 47 de nuestros trabajadores de derechos humanos, quienes fueron asesinados en el curso de su trabajo documentando e investigando violaciones de derechos.

Las **matanzas masivas** de activistas por el derecho a la tierra son comunes, al igual que el asesinato de abogados de derechos humanos que trabajan pro bono para campesinos, ecologistas, activistas, presos políticos y organizaciones de movimientos sociales, como fue el caso de Benjamín Ramos. Ninguna categoría de defensores de derechos humanos se ha salvado. Las víctimas también incluyen a **Mariam Acob**, una becaria del Fondo de Acción Urgente por los Derechos de las Mujeres y asistente legal de la Alianza para los Derechos Humanos Kawahib Moro, una organización miembro de Karapatan, que fue asesinada en su hogar en septiembre, y a **Danny Boy Bautista**, un sindicalista de la empresa Sumifru en el Valle de Compostela, que fue muerto a tiros en octubre.

Los periodistas también son hostigados y asesinados sistemáticamente: **al menos 12** han sido asesinados hasta el momento durante el gobierno de Duterte; el último ha sido Joey Llana, un presentador de radio de Albay que en julio fue muerto a tiros en una emboscada, tras recibir repetidas amenazas de muerte.

Los defensores de derechos humanos que no son asesinados, rutinariamente ven sus oficinas allanadas, incendiadas y sometidas a vigilancia. Esto logra el objetivo de sembrar el terror entre ellos y entre las comunidades con que trabajan. La mayoría de ellos son sometidos a vigilancia, acosados, fotografiados y reciben llamadas y mensajes de texto amenazadores. Esto se ve facilitado por el hecho de que son atacados sistemáticamente por campañas de difamación, tanto en internet como fuera de ella, que los etiquetan como “frentes comunistas”, “amantes del terrorismo”, “anti-desarrollo” e incluso “perezosos y arruina-hogares”.

También está aumentando el uso de arrestos ilegales, detención y enjuiciamiento de defensores de los derechos humanos sobre la base de acusaciones penales espurias. Estas se utilizan para inculcar el miedo y el silencio entre los defensores de derechos humanos y evitar que hagan su trabajo. Ahora se están aplicando nuevas tácticas que vienen a sumarse a la persistente jurisprudencia represiva.

A menudo, los cargos inventados son convenientemente presentados como delitos comunes, para ocultar la naturaleza política de los supuestos actos, negar la libertad bajo fianza, hacer más fácil la condena por evidencia simulada, o incluso burlarse de la labor de incidencia que hacen los defensores de derechos humanos. De ahí que no sorprendiera a nadie que, aunque el presidente Duterte había estado inicialmente abierto a la liberación incondicional de todos los presos políticos, más tarde retrocediera y en cambio detuviera a 225 más. En la actualidad hay aproximadamente **540 presos políticos** en Filipinas, la mayoría de ellos defensores de derechos humanos.



Los manifestantes marcharon hacia el Congreso filipino mientras el presidente Duterte pronunciaba su Discurso sobre el Estado de la Nación en julio.

Crédito: Jes Aznar/Getty Images

A pesar de estas amenazas, como lo deja en claro Cristina, la sociedad civil en Filipinas está oponiendo resistencia:

*La sociedad civil filipina ha perseverado en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas por las víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos. En un contexto muy adverso, todos los desarrollos positivos han sido impulsados por la persistencia de la sociedad civil. Entre ellos se incluyen los altamente inusuales casos de condenas de **agentes de policía** por matar a un adolescente en el curso de la “guerra contra las drogas” y de un **general retirado** acusado de secuestro y detención ilegal grave por la desaparición forzada de dos estudiantes hace más de 12 años.*

*A pesar de las restricciones, la sociedad civil ha seguido movilizándose frente a la injusticia, organizando protestas masivas en diversas ocasiones durante 2018, incluidas la ceremonia del **Discurso sobre el Estado de la Nación**, pronunciado por el presidente en julio, la conmemoración del **46° aniversario** de la declaración de la Ley Marcial en septiembre, y el **Día Internacional de los Derechos Humanos** en diciembre.*

Como lo sugiere el ejemplo de Filipinas, dondequiera que los activistas sindicales son atacados, también lo son otros que se oponen al poder económico dominante, y especialmente los defensores de los derechos de los pueblos indígenas, del medio ambiente y de la tierra. **Perú**, al igual que Filipinas, es un país donde existe un claro patrón de intimidación y asesinato de defensores de derechos humanos, con una amenaza particular proveniente de bandas criminales vinculadas a los traficantes de tierras. **Dos agricultores**, Celestino Flores Ventura e Irineo Curiñaupa Campos, fueron asesinados a tiros mientras protestaban durante una huelga nacional en enero, y más de 60 personas resultaron heridas. Las movilizaciones en otros lugares fueron dispersadas a la fuerza, a costa de muchas lesiones que fueron denunciadas. Los agricultores protestaban por la caída del precio de sus cultivos de papa y el alto nivel de importaciones de alimentos a Perú.

Los asesinatos continuaron: en abril fue asesinada **Olivia Arévalo Lomas**, lideresa de los indígenas Shipibo-Konibo y defensora de los derechos culturales y espirituales de su comunidad. Perú también fue testigo de protestas contra la **corrupción** en 2018: en septiembre, cientos de personas marcharon en la capital, Lima, para reclamar reformas en materia de gobernanza, incluida una propuesta de criminalizar la no presentación de informes sobre las contribuciones recibidas por las campañas políticas.

PROTESTAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL CARBÓN

En 2018 se llevaron a cabo las mayores **protestas** de **Tailandia** desde la instauración del **gobierno militar** en 2014. Más de mil personas protestaron en la ciudad de Chiang Mai en abril por el arrasamiento de tierras forestales para construir edificios gubernamentales. Las fotos aéreas compartidas en las redes sociales mostraron un nuevo complejo de viviendas de lujo para jueces enclavado profundamente en el bosque. Los manifestantes, muchos de ellos con **cintas verdes**, exigieron que los nuevos edificios fueran demolidos. El gobierno militar, que normalmente adopta una línea dura ante las expresiones públicas de disenso, permitió que la protesta siguiera adelante porque consideró que estaba enfocada en temas ambientales, no políticos.

En **India**, en cambio, las protestas contra la planta de cobre Sterlite, acusada de contaminar el aire y el agua en la ciudad de Thoothukudi, Tamil Nadu, dieron un **giro trágico** en mayo. Cuando se cumplían 100 días de protestas, unas 15 personas perdieron la vida cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra multitudes de manifestantes. Aparentemente algunas personas fueron deliberadamente atacadas. La planta intentaba expandirse contra la fuerte oposición local. En febrero, más de 250 activistas fueron arrestados durante una huelga de hambre en oposición a los planes. Tras la violencia de mayo, la planta fue temporariamente cerrada, pero también se bloquearon las conexiones locales de internet y se informó que 65 personas habían sido arrestadas. La sociedad civil se activó para condenar la violencia, arriesgándose a convertirse ella misma en blanco de ataques: en agosto, el activista Thirumurugan Gandhi fue **detenido** a su regreso al país tras asistir a una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde habló sobre el uso letal de la fuerza.

Como lo sugieren el ejemplo de India y varios otros ya mencionados, los defensores de los derechos de los pueblos indígenas, el medio ambiente y el derecho a la tierra son a menudo atacados cuando intentan defender a las

comunidades afectadas por las grandes industrias extractivas y las obras de infraestructura en gran escala del poder corporativo transnacional y de los gobiernos estrechamente vinculados con él. Hubo numerosos ejemplos de represión de esas voces procedentes de zonas que no son las que presentan mayor peligro de tales ataques, tanto en América Latina como en el sur y el sudeste de Asia. En **Kenia**, por ejemplo, dos activistas ambientalistas fueron **arrestados** en mayo cuando protestaban contra un proyecto para establecer una central eléctrica de carbón. La empresa, un emprendimiento conjunto de Kenia y China, planeaba importar su carbón desde Sudáfrica.

La minería de carbón también es una práctica cuestionada en **Alemania**. Aunque la sociedad civil alemana goza de condiciones mayormente abiertas, en septiembre el país presenció el **desalojo** forzoso de los activistas ambientalistas que durante seis años habían ocupado el bosque de Hambach para impedir la minería de carbón. Un activista murió en un aparente accidente durante el desalojo. Cuando se produjo el desalojo hubo protestas en varios lugares de Alemania, que provocaron el cierre temporario de una central eléctrica de carbón. Como consecuencia de una demanda legal presentada por los manifestantes, la tala del bosque se detuvo en octubre; todavía no hay una decisión definitiva sobre el asunto.

Hay pocos lugares donde la minería del carbón sea tan controvertida como en **Australia**, que es uno de los mayores productores de carbón del mundo y está en la primera línea del cambio climático. La sociedad civil ha seguido haciendo campaña contra la minería, como lo demostraron las protestas contra la expansión minera en Queensland. En marzo, trece **manifestantes** de **Frontline Action Against Coal** (Acción de Vanguardia contra el Carbón) fueron multados colectivamente, por un total de aproximadamente 60.000 dólares, por una acción en la que cerraron un puerto de carbón, propiedad de Adani Group, una compañía india. Los manifestantes, que se encadenaron a equipos de carga de carbón en Abbot Point Port, Queensland, fueron acusados del raro delito de “interferir intencionalmente o imprudentemente con el funcionamiento de un puerto”. Descripto como el mayor movimiento ambientalista en la historia de Australia y motivado

por la preocupación por el impacto de la minería del carbón sobre el agua y los arrecifes, así como por el cambio climático, la campaña Stop Adani logró que 35 bancos, incluidos los chinos, se comprometieran a no financiar la expansión de la mina de carbón. Las protestas contra la construcción de la mina continuaron, y unas 15.000 personas **marcharon** en diversas ciudades de Australia en diciembre.

En **Nueva Zelanda**, en septiembre, fue la extracción de oro la que estuvo bajo el foco de atención: cinco miembros del grupo anti-minería *Protect Karangahake* fueron **arrestados** cuando ocupaban una mina de oro que se había establecido en una zona de conservación. Anteriormente, en enero, cinco activistas de Greenpeace habían sido **arrestados** cuando ocupaban un barco de suministro en alta mar en protesta contra la exploración petrolera.

REINO UNIDO: LA REANUDACIÓN DEL FRACKING PROVOCA NUEVAS PROTESTAS

En octubre, el **regreso** del fracking al **Reino Unido** tras una pausa de siete años fue saludado con renovadas protestas. La empresa energética Cuadrilla reanudó las perforaciones en Lancashire, en el noroeste de Inglaterra, luego de que el gobierno central anulara una prohibición impuesta por las autoridades locales tras una serie de temblores de tierra. Los manifestantes reaccionaron a la reanudación del fracking intentando bloquear el acceso al sitio, y las protestas en el lugar continuaron durante todo el año. Las operaciones de fracking fueron **suspendidas** repetidamente tras numerosos nuevos temblores de tierra.

Junto con los temblores, en un país con poca experiencia en terremotos, los manifestantes señalan los impactos de la contaminación y el uso excesivo de agua, así como la evidente incompatibilidad del fracking con



En octubre, manifestantes anti-fracking, entre ellos Vivienne Westwood, se movilizaron contra el reinicio del fracking en el sitio de Cuadrilla en Lancashire.

Crédito: Ki Price/Getty Images

los compromisos de mitigación del cambio climático. Los partidarios del fracking presentan un argumento económico, afirmando que reduce la dependencia de las importaciones de petróleo. Los sitios de fracking son rurales y están alejados de los centros de toma de decisiones, y los manifestantes consideran que su gobierno está firmemente del lado de las empresas extractivas.

Este ciertamente pareció ser el caso en septiembre, cuando tres manifestantes anti-fracking, Rich Loizou, Richard Roberts y Simon Roscoe, fueron **enviados a prisión** por un período de 15 a 16 meses por “causar una molestia pública” al montarse en camiones durante una protesta de cuatro días fuera del sitio de Cuadrilla en Lancashire. Fueron los primeros manifestantes anti-fracking encarcelados en el Reino Unido, lo cual significó el quiebre de una larga tradición que dictaba que las personas condenadas por delitos cometidos en el curso de su participación en acciones directas no violentas no iban a la cárcel. En ese contexto las sentencias provocaron enojo generalizado. Los tres condenados fueron liberados el mes siguiente, cuando sus sentencias fueron **anuladas** en la instancia de apelación. Los jueces de la corte de apelaciones describieron las sentencias como “manifiestamente excesivas” y se revelaron posibles **vínculos** entre el juez original y la industria petrolera.

En términos más generales, la sociedad civil expresó su preocupación por las restricciones sobre el espacio cívico de los grupos que protestaban contra el fracking, con un alto número de detenciones de manifestantes, interdictos judiciales y policías agresivos y de posición evidentemente sesgada. A principios de año, **se supo** que algunos activistas anti-fracking habían sido calificados de extremistas y monitoreados bajo el programa de vigilancia anti-extremista del gobierno del Reino Unido, supuestamente creado para prevenir el terrorismo islámico. Como fue también el caso con los manifestantes anti-deportación conocidos como los 15 de Stansted (**véase sección 2**) y al igual que en otros países, este caso puso en evidencia que iniciativas aparentemente motivadas por la lucha contra el terrorismo pueden ser instrumentalizadas para restringir el activismo pacífico. Según se

informó, entre los referidos al programa se encontraba un niño de 14 años que había expresado su ardiente oposición al fracking en las redes sociales. Un proyecto de ley para ampliar el alcance del programa anti-extremista fue duramente **criticado** por Nuala Ní Aoláin, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.

Las empresas de fracking no consiguieron salirse completamente con la suya. A principios de año, en marzo, los activistas anti-fracking lograron una **victoria** cuando el Consejo de Jefes de la Policía Nacional acordó una consulta pública sobre la vigilancia de las protestas contra el fracking. El mes siguiente, el Tribunal Superior rechazó una solicitud presentada por la empresa UK Oil and Gas para prohibir las protestas contra el fracking en sitios de explotación en el sur de Inglaterra. En el momento de redactar este informe, las empresas de fracking están **cabildeando** para que se relajen las regulaciones sobre los temblores de la tierra. Los manifestantes continuarán movilizándose en lo que consideran una batalla crucial para el futuro de sus comunidades y su país.

LAOS: LOS PELIGROS MORTALES DE LOS GRANDES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS CÍVICOS CERRADOS

Los peligros que para los ciudadanos representan los grandes proyectos de infraestructura liderados por gobiernos y grandes corporaciones,

a menudo con base en el extranjero y no obligados a rendir cuentas, se pusieron de manifiesto de manera clara y triste en Laos en julio. La represa hidroeléctrica Xe-Pian Xe-Namnoy, en construcción en el río Mekong, colapsó repentinamente, arrasando pueblos enteros y matando a muchas personas. Bajo el gobierno férreamente cerrado de Laos, fue difícil saber cuánta gente perdió la vida en la tragedia. Las cifras oficiales sugirieron que las víctimas fatales habían sido alrededor de 40, pero la sociedad civil sostuvo que el número era mucho mayor, y los informes iniciales afirmaron que al menos 800 personas habían desaparecido. Miles de personas más fueron desplazadas, inclusive hacia la vecina Camboya. Sorprendentemente, la primera respuesta de la compañía responsable del proyecto, un emprendimiento conjunto de Laos, Corea del Sur y Tailandia, fue negar que la represa se hubiera derrumbado, culpando en cambio a las fuertes lluvias. La población local también se quejó de que no se les advirtió con suficiente rapidez que evacuaran sus hogares inmediatamente después del colapso.

Laos es un rígido estado comunista de partido único donde el espacio cívico está cerrado y el disenso no es tolerado. Los activistas son encarcelados, el uso de las redes sociales está estrictamente vigilado y las OSC deben obtener aprobación previa para cualquier actividad de recaudación de fondos. El gobierno ordenó a las OSC internacionales que acudieron a Laos para brindar una respuesta humanitaria no hablar con los medios de comunicación como condición para que se les permitiera trabajar, mientras que a los equipos locales de rescate se les ordenó rápidamente que abandonaran la zona del desastre. Aunque el gobierno anunció que se estaba llevando a cabo una investigación sobre la tragedia, fue poco lo que la ciudadanía pudo saber al respecto. El gobierno declaró la suspensión de todos los nuevos proyectos de represas hasta que fueran revisados (la represa dañada era una de varias construidas o en construcción en el Mekong, ya que el gobierno persigue el crecimiento económico mediante la exportación de electricidad a los países vecinos), pero los trabajos preliminares para la construcción de nuevas represas con respaldo chino **continuaron**, haciendo caso omiso del desastre

anterior. Los grupos ecologistas han criticado durante mucho tiempo la estrategia de construcción de represas del gobierno.

En condiciones cerradas, no fue de extrañar entonces que cuando la comisión intergubernamental del río Mekong realizó en septiembre una **consulta** sobre una nueva propuesta de represa, muchos miembros de la sociedad civil se mantuvieron alejados por temor a las repercusiones o por no creer que la consulta pudiera lograr ningún impacto. La Alianza del Mekong de Camboya, una coalición de 52 OSC, no participó porque sus intentos previos de plantear sus preocupaciones al gobierno habían sido ignorados.

Lo que mostró la tragedia de Laos es que la supresión del disenso en aras de la búsqueda de crecimiento económico incrementa las posibilidades de sufrir desastres, y que cuando estos ocurren la respuesta se vuelve más difícil. Al mismo tiempo dificulta el aprendizaje de lecciones que pueden ayudar a prevenir futuros desastres. Al menos en Corea del Sur, hogar de la empresa que dirige el proyecto, SK Engineering and Construction, la gente pudo protestar: en septiembre se realizó una **manifestación** frente a la sede de la empresa, en reclamo de que el gobierno y la empresa asumieran su responsabilidad. Los manifestantes señalaron que la participación de Corea del Sur en el proyecto había sido respaldada por su gobierno como parte de su asistencia oficial para el desarrollo (AOD) a Laos, lo cual suscitó interrogantes preocupantes sobre el papel del gasto gubernamental en el desarrollo de proyectos no responsables que tienen un impacto negativo sobre las comunidades.

LA SOCIEDAD CIVIL CONTRAATAACA

Como lo indican varios de los ejemplos anteriores, los proyectos extractivos y de infraestructura a menudo involucran a socios extranjeros, y cuando las decisiones se toman en sus países de origen, a miles de kilómetros de distancia, puede ser difícil para la sociedad civil en las comunidades

afectadas influir sobre la toma de decisiones. Pero una activista de **Papúa Nueva Guinea** llevó este mensaje directamente a la sede central: en abril, la activista indígena y defensora de los derechos ambientales, **Cressida Kuala**, fundadora de la Asociación de Mujeres de Porgera Red Wara, viajó a la sede de la compañía minera Barrick Gold en Toronto, Canadá, que dirige la Mina de oro Porgera, un emprendimiento conjunto con una corporación china. Allí, informó de primera fuente a los accionistas y otros interesados sobre la situación de las comunidades que viven cerca de la mina en Porgera, mientras sus partidarios organizaban una protesta en el exterior. El impacto ambiental incluye la contaminación del agua, la erosión de la tierra, el vertido de productos químicos, la destrucción forzada de viviendas cercanas a la mina y lo que parece ser una campaña sistemática de violaciones por parte de los guardias de seguridad de la mina.

En otra victoria para la sociedad civil, en mayo el gobierno de las **Islas Solomón** retiró la licencia para extraer bauxita en la isla Nendö a una empresa **australiana**, AU Capital Mining, porque la empresa no había logrado establecer relaciones amistosas con la comunidad local. Hubo denuncias de que la compañía había coaccionado y engañado a los pobladores para que firmaran cesiones de derechos sobre sus tierras, por lo que se iniciaron prolongadas protestas en reclamo del retiro de la licencia de la compañía para operar.

Los manifestantes ambientalistas también lograron una victoria en **Estonia** en junio. Cuando más de mil personas formaron una cadena humana para **protestar** contra el proyecto de una planta de celulosa en la aldea de Tabivere, preocupado por el impacto ambiental, el gobierno dio marcha atrás con los planes.

AMÉRICA LATINA: LLAMANDO AL PODER CHINO A RENDIR CUENTAS

En América Latina, la inversión china desempeña un rol muy importante, pero a menudo no rinde cuentas. En 2018, la sociedad civil se unió para intentar obligar al gobierno de China a rendir cuentas por su actividad en la región, aprovechando que en noviembre tendría lugar la evaluación del gobierno de China bajo el proceso del Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (*véase sección 4*). Les pedimos a Paulina Garzón, de la **Iniciativa de Inversión Sostenible China – América Latina**, María Marta Di Paola, de la **Fundación de Medio Ambiente y Recursos Naturales** de **Argentina**, Sofía Jarrín, del **Centro de Derechos Económicos y Sociales** de **Ecuador**, y Julia Cuadros, de **CooperAcción** en **Perú** que **explicaran** porqué la iniciativa es necesaria:

China es el primer o el segundo socio comercial para todos los países sudamericanos, y resalta el hecho de que la gran mayoría de las exportaciones hacia China se concentra en petróleo, minerales y soja. En otras palabras, las inversiones chinas o motorizadas por la demanda china han dado un nuevo impulso al sector primario y, dentro de éste, a las industrias extractivas, de modo tal que la relación económica entre China y América Latina impone grandes desafíos tanto ambientales como en relación con los derechos de las comunidades donde se asientan estas inversiones. El crecimiento y la escala del financiamiento chino en América Latina ha tomado a las organizaciones sociales y a las comunidades por sorpresa. Hasta ahora, es poco lo que la sociedad civil ha podido hacer para demandar rendición de cuentas directamente a los bancos, compañías y agencias reguladoras chinas, en parte por falta de

“
 LAS EMPRESAS
 TRANSNACIONALES
 HAN CONTRIBUIDO
 A NUMEROSAS
 VIOLACIONES DE
 LOS DERECHOS
 HUMANOS, ENTRE
 ELLAS LA PRÁCTICA
 SISTEMÁTICA DE
 CRIMINALIZACIÓN
 DE LOS DEFENSORES
 AMBIENTALES.

”

conocimiento y acceso a los procedimientos de estas instituciones, pero sobre todo por el hermetismo que las caracteriza.

Las empresas transnacionales han contribuido a numerosas violaciones de los derechos humanos, entre ellas la práctica sistemática de criminalización de los defensores ambientales. Sobre esta misma línea, cabe agregar que China ha seguido el principio de “no interferencia” en la construcción de su relación con América Latina, lo cual ha dado como resultado una interacción casi exclusiva con los gobiernos de turno, sin inclusión de actores no gubernamentales. En este contexto, las organizaciones sociales latinoamericanas no hemos logrado establecer canales de diálogo sustanciales con las instituciones chinas, y tanto menos en lo que se refiere a la demanda de rendición de cuentas acerca de los impactos negativos de su intervención.

Al unirse, las OSC de América Latina decidieron aprovechar la oportunidad presentada por el proceso del EPU para comenzar a revertir el déficit de rendición de cuentas, como lo describen las cuatro entrevistadas:

Decidimos hacer uso de las herramientas que ofrece el sistema internacional de derechos humanos para establecer una conversación sobre la necesidad de llamar a los gobiernos a rendir cuentas de los efectos de sus inversiones y de las acciones de sus empresas en el extranjero.

*Pese a que no cuenta con una autoridad y mecanismos de aplicación, el sistema universal de derechos humanos, dentro del cual se encuentra el **mecanismo EPU**, ofrece valiosas oportunidades de incidencia para la sociedad civil en todo el mundo. El EPU ofrece un espacio para que las comunidades afectadas en sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales hagan oír sus reclamos.*

Por lo general, la responsabilidad por los derechos vulnerados es adjudicada al estado dentro de cuyo territorio ocurren dichas violaciones de derechos. Así, en el marco del EPU de China, el grueso de las recomendaciones que recibe el estado chino se vincula con el trato que reciben sus ciudadanos dentro de su territorio. Sin embargo, nada impide a las comunidades afectadas en sus derechos en diversos países de América Latina presentar reclamos por las acciones de un país extranjero miembro de las Naciones Unidas. En otras palabras, nada impide a los grupos vulnerados invocar el principio de extraterritorialidad para demandar a un estado extranjero el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos contraídas por la aceptación de los

instrumentos de las Naciones Unidas, así como a través de todo compromiso voluntario que dicho estado haya ratificado y asumido.

Creamos una alianza regional con el objeto de investigar colaborativamente y elaborar un informe sombra nacional para cada uno de los países sudamericanos incluidos en el proyecto, así como un informe sombra regional. En marzo estos informes fueron presentados a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como aportes para el EPU de China. Esta iniciativa cobró vida en 2017, con la búsqueda de una alianza regional para fortalecer nuestro trabajo de incidencia frente al estado chino.

La participación en el mecanismo del EPU es para nosotras una ventana de oportunidad para canalizar las preocupaciones y visibilizar las múltiples violaciones a los derechos humanos de las comunidades afectadas por proyectos cuyo financiamiento y operación se vinculan con inversiones del estado chino. En varios casos hemos abogado frente a las entidades chinas para que mejoren sustancialmente su comportamiento ambiental y social y para que actúen como buenos ciudadanos globales. La falta de respuestas por parte de tales entidades nos ha llevado a buscar nuevos espacios de interlocución con el gobierno chino en los foros internacionales.

Tenemos la esperanza de que el EPU de China y demás mecanismos de las Naciones Unidas ofrezcan el tan necesario espacio para lograr un compromiso serio de parte de los bancos y empresas chinas en materia de internalización de los principios de derechos humanos en sus operaciones en el extranjero.

CANADÁ: VICTORIA CONTRA UN OLEODUCTO EN UN AÑO DE PROTESTAS

También en **Canadá** los manifestantes obtuvieron una gran victoria en agosto, cuando, luego de años de campaña, un tribunal de apelación decidió por **unanimidad** retrasar la construcción del proyecto Trans Mountain Pipeline, planeado para llevar petróleo de las arenas alquitranadas de Alberta a Burnaby, en la costa de Columbia Británica. En agosto, el gobierno canadiense asumió el control del proyecto de la empresa Kinder Morgan, con base en los Estados Unidos.



Niños ecuatorianos protestaron contra el extractivismo minero durante el Día Internacional de la Mujer en marzo.

Crédito: Jonathan Rosas/Anadolu Agency/Getty Images

Si tiene éxito, el proyecto casi triplicaría la cantidad de petróleo que fluye a la terminal de Burnaby y aumentaría enormemente el número de petroleros que utilizan el puerto, con un incremento inevitable del impacto ambiental. Las protestas han sido lideradas por varios grupos de las Primeras Naciones y grupos ecologistas, incluso a través de bloqueos de la terminal Kinder Morgan. Miles de personas han participado a lo largo de los años. En contraste con la posición del gobierno federal, el gobierno de Columbia Británica y los gobiernos municipales también se oponen al proyecto. El poder judicial **dictaminó** que el proyecto del oleoducto no había sido adecuadamente sometido a consultas con los pueblos originarios ni había tomado en cuenta el impacto ambiental sobre la población de orcas de Columbia Británica.

Sin embargo, la victoria judicial puede representar un éxito solamente temporario para las campañas de la sociedad civil; dado que obliga a una nueva ronda de consultas. Ello sugiere la necesidad de una campaña sostenida y la creación de alianzas, entre otras cosas con los organismos gubernamentales subnacionales que comparten con la sociedad civil la oposición al proyecto. También debe reconocerse que hay corrientes de apoyo al proyecto, que promete crear empleos. En noviembre miles de personas salieron a las calles de Calgary, Alberta, para **exigir** la construcción del oleoducto y protestar contra un proyecto de ley que extendería la consulta a los pueblos de las Primeras Naciones afectados por grandes proyectos energéticos.

Estas protestas y contra-protestas subrayaron claramente la tensión existente entre la imagen internacional positiva proyectada por el Primer Ministro Justin Trudeau y los compromisos de cambio climático y ambiental de Canadá, por un lado, y el imperativo de perseguir el crecimiento económico sobre la base de los recursos naturales de Canadá, por el otro. Este fue el trasfondo de una oleada de activismo popular en Canadá en la cual los ciudadanos trabajaron para exigir al gobierno consistencia con su reputación y compromiso. En noviembre miles de personas se reunieron en Montreal para **exigir** que el gobierno del estado de Quebec priorizara

la acción sobre el cambio climático. El año también presencié protestas de agricultores contra los acuerdos comerciales, protestas tanto a **favor** como en contra de refugiados y migrantes – especialmente en **Quebec**, donde el nuevo gobierno ha prometido adoptar una línea más dura con respecto a la inmigración -, **protestas** de los pueblos de las Primeras Naciones sobre el trato recibido por los niños indígenas en el sistema de cuidados, y protestas a favor y en contra del **aborto**, entre muchas otras. La tradición de Canadá de debate en la plaza pública goza de buena salud y todo indica que continuará su curso.

EL FOCO SOBRE FRANCIA: GOBIERNO PRO- EMPRESARIAL ENFRENTA OPOSICIÓN CIUDADANA

Pese a las afirmaciones de su líder, el presidente Emmanuel Macron, de que practica una política diferente, **Francia** fue otro país que durante 2018 a menudo se puso del lado de las grandes empresas. En abril, un intento de **desalojar** una prolongada ocupación de una comunidad alternativa y anticapitalista en el municipio de Nôtre-Dame-des-Landes acabó en violencia. Durante mucho tiempo el sitio había sido propuesto para emplazar un nuevo aeropuerto, al que se oponían los agricultores locales y activistas ambientalistas, y en 2008 se había fundado allí una comunidad alternativa que vivía de manera autónoma del estado. Si bien los planes del aeropuerto fueron cancelados en enero, las autoridades insistieron en que la comunidad fuera desalojada. Se desplegaron alrededor de 2500 efectivos antidisturbios que utilizaron enormes cantidades de gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento, incluso contra periodistas que cubrían el evento, mientras que algunos manifestantes lanzaban bombas de gasolina y quemaban barricadas. El Sindicato de Periodistas Franceses se quejó de que inicialmente se impidió a sus miembros cubrir el desalojo. El intento de desalojar a la comunidad puso

de relieve la existencia de un conflicto de valores en torno del capitalismo y sugirió que el estado se estaba volviendo cada vez más intolerante hacia las formas de vida alternativas. Pero hacia enero de 2019, los miembros de la comunidad aún permanecían en el lugar y **celebraron** el primer aniversario de la cancelación de los planes del aeropuerto.

En mayo, más de 100 personas fueron detenidas en **violentas** protestas del Día del Trabajo en París, la capital. La policía usó gases lacrimógenos y cañones de agua mientras que algunos manifestantes lanzaron bombas de gasolina y rompieron ventanas. La violencia ensombreció una protesta pacífica convocada por los sindicatos para expresar su oposición al debilitamiento de las leyes laborales. El estado exhibió aún más su poder en junio, cuando en una serie de redadas policiales fueron **detenidos** varios activistas contra los desechos nucleares junto con el abogado que los representa, acusados de provocar daños durante las protestas.

Las preocupaciones de la sociedad civil se reforzaron en julio, cuando se **promulgó** una nueva ley sobre el secreto comercial. Muchas OSC, sindicatos de medios y académicos **criticaron** la nueva ley por limitar excesivamente las libertades de expresión e información. La nueva ley, que fue aprobada rápidamente y con poco debate, contiene una definición muy amplia de lo que constituye un “secreto comercial”. En ese sentido, podría hacer más difícil someter a investigación a las empresas y llamarlas a rendir cuentas por los impactos negativos de sus operaciones. La creciente preocupación de la sociedad civil ante el vuelco pro-empresarial de la Francia del presidente Macron también se vio alimentada por la presentación, en enero, de una demanda por difamación por parte dos compañías francesas con operaciones en **Camerún**, Socfin y Socapalm, ambas afiliadas al Grupo Bolloré, contra tres periódicos – Mediapart, L’Obs y Le Point – y contra dos OSC, ReAct y Sherpa. Los acusados habían informado sobre los reclamos de los aldeanos y agricultores cameruneses, que sostenían que las compañías estaban involucradas en el acaparamiento y la explotación de sus tierras. En respuesta a la demanda, varias OSC y grupos de medios franceses lanzaron la campaña ‘*On ne se taira pas*’ (‘no nos callaremos’). La demanda

fue identificada como un caso de litigio estratégico contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) y la campaña se enfocó en la reforma legal en Francia para proteger la libertad de expresión.

A nivel mundial existe una creciente preocupación por el uso cada vez mayor de las **SLAPP** para reprimir el disenso de la sociedad civil y la investigación y revelación de los abusos corporativos. Las SLAPP parecen estar extendiéndose desde los **Estados Unidos** a Europa: en **Portugal**, por ejemplo, el conocido periodista de investigación **Arlindo Marquês** fue demandado por la compañía papelerá Celtejo por dañar su credibilidad y su buen nombre después de que la acusara de haber contaminado inaceptablemente el Río Tajo.

El descontento con las políticas comerciales del presidente Macron, así como la determinación de éste de debilitar las leyes laborales, continuaron en Francia durante todo el año, y el país sufrió varias huelgas, incluida una de los trabajadores ferroviarios. Pero nada había preparado al establishment político para el estallido de las airadas y frecuentemente violentas protestas de los chalecos amarillos (gilets jaunes), que comenzaron en noviembre.

Las protestas, cuyos participantes se caracterizaban por vestir chalecos de seguridad de alta visibilidad, comenzaron el 17 de noviembre y se prolongaron en 2019. Las tácticas clave de protesta incluyeron bloqueos de carreteras, ocupaciones de peajes y rotondas, y marchas todos los sábados en París y en muchas otras ciudades francesas. Se estima que unas 300.000 personas participaron en las primeras protestas, que incluyeron muchos bloqueos de carreteras, además de bloqueos de varios depósitos de combustible. Pero el costo fue elevado: en esa primera semana de protestas, se informó que dos personas habían muerto y más de **530 resultaron heridas** cuando el tráfico vehicular intentó **atravesar** los bloqueos.

Ese primer fin de semana también se realizaron protestas en **Reunión**, una región francesa de ultramar en el Océano Índico. Cuando las protestas contra la pobreza degeneraron en saqueos y disturbios se desplegaron efectivos militares.



Las protestas de los chalecos amarillos se iniciaron a raíz de una iniciativa de aumento de los impuestos sobre el combustible, y crecieron rápidamente.

Crédito: Jeff J. Mitchell/Getty Images

La chispa inicial de protesta en la Francia continental fue una impopular propuesta de aumento de los impuestos sobre el combustible, y especialmente el diésel, además de nuevos controles de velocidad en caminos rurales. La gente se quejaba de que dependía de sus vehículos para ir a trabajar y no contaba con formas alternativas de transporte. Los manifestantes argumentaron que protestaban porque ya les resultaba difícil llegar a fin de mes, aun teniendo trabajo, y se verían muy afectados por cualquier aumento adicional en los costos.

Pero por supuesto, el movimiento fue por mucho más que el planeado aumento del impuesto al combustible. Fue en gran medida una revuelta de los suburbios, los pueblos y las periferias, más que de los habitantes de los centros urbanos: una rebelión de gente de clase trabajadora y de clase media baja. Se trató a menudo de personas que se sentían económicamente maltratadas y abandonadas, así como distantes de la élite política; que sentían que el gobierno no las escuchaba. El presidente Macron, que en 2017 había llegado al poder planteando un desafío al orden establecido, fue criticado por el movimiento como parte de una élite metropolitana sin contacto con la realidad, incapaz de entender las vidas de la gente de clase trabajadora y de la población rural. Los manifestantes lo descalificaron en tanto que **presidente de los ricos** y contrastaron la propuesta de aumento del impuesto a la gasolina con el programa gubernamental de recortes de impuestos a las empresas y los ricos. Las quejas de los manifestantes se ampliaron a medida que pasaban las semanas, y en la tercera semana los manifestantes pidieron la renuncia del presidente Macron. Los estudiantes también comenzaron a protestar, en contra de las matrículas para estudiantes extranjeros y de propuestas de cambio en los exámenes.

A medida que se extendieron, las protestas se vieron marcadas por la violencia. En el segundo fin de semana de protestas en París, algunos manifestantes iniciaron incendios en las calles y destrozaron el pavimento. La policía usó gases lacrimógenos, cañones de agua y gas pimienta contra los manifestantes, así como topadoras para despejar los bloqueos. En cada uno de los fines de semana subsiguientes hubo violencia: ataques incendiarios

contra tiendas y vehículos, saqueos, y respuestas violentas de las fuerzas de seguridad. En París las protestas se convirtieron en disturbios el 1 de diciembre; ese mismo día, una mujer de 80 años **murió** en Marsella cuando una granada de gases lacrimógenos de la policía atravesó su ventana. Las posiciones se habían endurecido y la polarización se estaba asentando.

Luego de tres semanas de movilizaciones, la propuesta de aumento del impuesto al combustible fue **descartada**; fue la primera vez que el presidente Macron ejecutó un cambio de política en respuesta a las protestas callejeras. Sin embargo, **no logró** aplacar la ira de los manifestantes, y las movilizaciones continuaron. En un **discurso televisado** del 10 de diciembre, el presidente Macron ofreció un **paquete** de concesiones sobre impuestos y salario mínimo. Esta oferta material representó un reconocimiento de las preocupaciones cotidianas que habían motivado a la gente a salir a las calles. El presidente también reconoció las difíciles circunstancias vitales de muchas personas y la legitimidad del sentimiento de aislamiento de los manifestantes respecto de la toma de decisiones. Sin embargo, se negó a restablecer un impuesto a la riqueza. Las protestas **continuaron**.

El movimiento de protesta abrevó de un sentimiento antigubernamental evidentemente generalizado. Incluso después de los disturbios en París, las **encuestas** mostraban que el 72% de los franceses apoyaba el movimiento, aunque el 85% decía estar en desacuerdo con la violencia. Al mismo tiempo, la popularidad del presidente Macron continuó **cayendo en picada**: según el promedio de varias encuestas, cayó desde 47% en diciembre de 2017 a tan solo 24% un año más tarde. A medida que se acercaban las elecciones para el Parlamento Europeo, programadas para mayo de 2019, también se informó que el partido del presidente Macron, *République En Marche*, estaba **perdiendo terreno** ante *Rassemblement National*, de extrema derecha.

Aunque los números de manifestantes cayeron a unas decenas de miles, las protestas continuaron en 2019, y con ellas la violencia. Las mujeres comenzaron a realizar protestas por **separado**, señalando su invisibilidad



Los chalecos amarillos advirtieron a su gobierno: "Quién siembra miseria, cosechará cólera".

Crédito: Chesnot/Getty Images

“

LA DISPOSICIÓN A ESCUCHAR CHOCÓ FRONTALMENTE CON EL ENFOQUE CENTRADO EN LA LEY Y EL ORDEN QUE HA CARACTERIADO A LA RELACIÓN DEL GOBIERNO CON EL DISENSO PÚBLICO.

”

como una parte importante de la fuerza laboral y tratando de mostrar que la ira de la protesta no debe conducir a la violencia. A principios de 2019, el presidente Macron comenzó una gira de “debate nacional” de tres meses, celebrando **reuniones** en los ayuntamientos para discutir las cuestiones planteadas. La iniciativa, una novedad, fue recibida con cierto **escepticismo**, pero permitió que el presidente Macron admitiera defectos en la política social y una “ruptura de la igualdad”. Al momento de escribir este artículo, también se rumoreaba que el presidente Macron podría celebrar un **referéndum** sobre algunas cuestiones clave planteadas por las protestas. Estas iniciativas parecieron tanto un intento de lidiar con la ira de una vez y para siempre, como una admisión de que no cabía retroceder: era necesario un cambio en la forma en que Francia es gobernada.

Pero la disposición a escuchar chocó frontalmente con el enfoque centrado en la ley y el orden que ha caracterizado a la relación del gobierno con el disenso público. Los poderes de emergencia que el gobierno inicialmente impulsó para combatir el terrorismo fueron codificados como **ley permanente** en octubre de 2017; estos poderes de emergencia se utilizaron en 2015 para **prevenir** posibles protestas cuando Francia organizó la cumbre sobre cambio climático. Diciembre fue testigo de numerosos arrestos, algunos de los cuales parecieron ser de naturaleza preventiva. Al momento de redactar este informe, 5600 personas habían sido detenidas y 1000 habían sido condenadas. En enero de 2019 una de las figuras más visibles del movimiento, **Eric Drouet**, fue detenida por segunda vez bajo la acusación de organizar una protesta no autorizada. Ese mismo mes, en una movida que pareció guiada por la intención de reforzar el apoyo de quienes abogan por una línea dura, el Primer Ministro francés, Edouard Philippe, **amenazó** con introducir nuevas leyes más severas, incluida una que establezca un registro de personas provocadoras de disturbios. Bajo una ley semejante se podría prohibir a ciertas personas participar en protestas, aunque no hayan sido previamente condenadas. Muchos políticos, incluidos algunos del partido del presidente Macron, **señalaron** como “autoritaria” la amenaza que tales medidas representarían para las libertades fundamentales.

Lo que estas iniciativas dejaron en claro fue la medida en que el gobierno había sido tomado por sorpresa y quedado desconcertado ante el movimiento de los chalecos amarillos y la magnitud de las protestas. En conjunto, la furia de protesta amenazó la reputación internacional del presidente Macron y, a nivel nacional, representó un riesgo para su agenda pro-empresarial y económicamente neoliberal. Cuando llegó al poder en 2017, el presidente Macron se había presentado como el antídoto contra el populismo. Las protestas de los chalecos amarillos demostraron que la cosa era mucho más complicada.

Este fue sin duda un movimiento populista, pero también fue un movimiento que pareció atraer a personas de todo el espectro político y de fuera de él. Muchos de sus participantes habían apoyado a los candidatos de la extrema derecha o de la izquierda radical en las últimas elecciones, y otros tantos habían expresado su **descontento** con todos los partidos políticos. Los participantes también cubrían un amplio rango de edad: no se trató de una revuelta de rasgos demográficos claramente definidos, como fue el caso del Brexit en el Reino Unido, fuertemente sesgado hacia las personas mayores. El establishment político inicialmente trató de presentar a los chalecos amarillos como un movimiento de extrema derecha, pero la escala del apoyo público que recibió sugería que las preocupaciones que representaba eran mucho más amplias y generalizadas.

El movimiento también pareció genuinamente carente de líderes, ya que había surgido en gran medida de llamamientos a la acción expresados en las **redes sociales**, y de hecho se resistió activamente a la idea de ser liderado. Su naturaleza orgánica y sin vértice lo tornó vulnerable a convertirse en un vehículo de la violencia extremista. En ausencia de líderes, incluso se hizo difícil para los actores del establishment político tratar de reunirse y negociar con el movimiento, factor que puede haber contribuido a la continuidad de las protestas.

Las protestas de los chalecos amarillos también exhibieron las dificultades que pueden enfrentar los gobiernos al tratar de reducir el consumo de combustibles fósiles. En Francia, y particularmente fuera de las ciudades, muchas personas dependen de sus automóviles y sucesivos gobiernos las han alentado a volcarse al diésel, manteniendo bajo su precio. Si las personas consideran esencial el uso de su automóvil, el aumento de impuestos sobre el combustible sin duda aumentará sus costos, mientras que no tendrá un gran efecto sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que era sin duda el efecto buscado cuando se decidió utilizar los impuestos como instrumento para abordar el cambio climático. No sin razón, la gente ha de preguntarse por qué se ha elegido para combatir el cambio climático un enfoque que impacta negativamente sobre los costos

de los ciudadanos a través de impuestos indirectos, en vez de afectar a las grandes empresas y sectores empresariales – tales como las industrias extractivas y de combustibles fósiles, los agronegocios y el transporte – que son responsables del grueso de las emisiones que dañan el medio ambiente. De ahí la acusación de que el gobierno está haciendo meramente política de imagen a expensas de los más pobres. En Francia, los manifestantes compararon su propia carga fiscal creciente con la eliminación de los impuestos sobre la riqueza. Así, un aumento de impuestos ostensiblemente destinado a combatir el cambio climático fue visto como una más de las medidas gubernamentales que han aumentado el costo de la vida.

Las motivaciones de los involucrados han sido variadas, pero en conjunto las protestas pueden ser consideradas una expresión de furia genuina, aunque a veces incoherente y con pocas demandas claras una vez que el aumento del impuesto sobre el combustible fue retirado. Una demanda clave que hicieron muchos manifestantes fue la de una democracia más directa que permita a la ciudadanía influir sobre la política nacional a través de referendos. Esto marcaría una ruptura con las tradiciones de gobierno a menudo centralizadas y elitistas de Francia, y podría alentar una mayor participación, aunque también podría alimentar la polarización, como ha ocurrido con referendos en otros lugares (*véase sección 3*).

Algunos actores de las protestas intentaron pasar directamente a la política electoral. En enero, un grupo inscribió una **lista** para las elecciones europeas, con una posición aparentemente anti-UE, bajo el estandarte del Movimiento Iniciativa Ciudadana. Otra persona dijo que **iniciaría** su propio partido político, aunque cualquiera que intentara posicionarse se arriesgaría a recibir la hostilidad de los integrantes del movimiento que insistían en que este no tenía líderes.

Indudablemente esta ira tuvo mucho en común con la desafección que alimentó el Brexit y con el populismo de derecha que está en marcha a lo largo de una gran franja de Europa (*véase sección 3*). Visualmente, como en otros lugares, las movilizaciones a menudo presentaron la apariencia de

una revuelta de la población blanca, residentes de larga data que alguna vez disfrutaron de certeza sobre su estatus y su papel en la sociedad, pero ahora se sentían menos seguros y más alejados del poder. Tal como ha ocurrido con la desafección observada en toda Europa, se trató en esencia de una rebelión conservadora más que radical: una rebelión que buscaba restaurar algo perdido más que crear algo nuevo. Por esta razón, muchas expresiones del movimiento de los chalecos amarillos, en Francia y en el extranjero, tuvieron un carácter xenófobo y anti-inmigración. A menudo estuvieron marcadas también por la hostilidad hacia los medios de comunicación, percibidos como parte del establishment.

Las comparaciones internacionales surgen fácilmente porque el chaleco amarillo fue adoptado rápidamente en otros lugares. Tal vez la genialidad del movimiento fue que utilizó un objeto cotidiano (por ley, en Francia todos los automovilistas deben llevar un chaleco amarillo) para convertirlo en un poderoso símbolo. El chaleco amarillo era barato y accesible, y se lo asociaba tanto con el trabajo manual como con la emergencia. Era al mismo tiempo visible, por diseño, e invisible, dada su asociación con el trabajo. Llevar el chaleco amarillo supuso reconocerse como clase trabajadora, anti-establishment e indignado; se convirtió en un atajo visual. Eso lo hizo propenso a viajar.

En la vecina **Bélgica**, las **protestas** de chalecos amarillos comenzaron en noviembre, también contra los precios del combustible y el costo de vida. Alrededor de 60 personas fueron arrestadas antes de que la protesta se tornara violenta. Los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales derivaron en disturbios y la policía usó gas lacrimógeno y cañones de agua, y ejecutó más arrestos. En vísperas de una nueva protesta en diciembre se realizaron arrestos masivos, lo cual generó preocupación sobre el enfoque sin matices adoptado por el estado. Los periodistas que cubrían las protestas también informaron haber sido blanco de agresiones de los manifestantes y de las fuerzas de seguridad.

Mientras tanto, la amenaza que el símbolo podía plantear a las autoridades quedó en evidencia en el represivo **Egipto**, cuando en diciembre se impusieron nuevas regulaciones según las cuales la venta de chalecos amarillos pasó a requerir un **permiso** de la policía. Importadores y vendedores mayoristas de chalecos amarillos fueron convocados a una reunión con la policía. El presidente **ruso** Vladimir Putin, por su parte, **intentó** justificar el encarcelamiento del activista Lev Ponomaryov en diciembre (**véase sección 3**) con la afirmación de que no quería ver en su país escenas similares a las de París.

En diciembre tuvieron lugar protestas de chalecos amarillos en Irak, Irlanda e Israel, por nombrar solo algunos casos. El chaleco amarillo resultó ser un símbolo **maleable**: en Alemania **tanto** los grupos de extrema derecha como los de extrema izquierda organizaron protestas de chalecos amarillo. En otros lugares, muchos de los que adoptaron el símbolo eran claramente populistas de derecha. Al otro lado del canal, en el Reino Unido, los manifestantes de extrema derecha que **acosaban** a políticos y figuras públicas opuestas al Brexit, así como a periodistas, usaban chalecos amarillos. Los manifestantes **canadienses** anti-inmigrantes y opuestos al impuesto al carbono también lo adoptaron, al igual que manifestantes progubernamentales y anti-UE en **Italia** y manifestantes anti-inmigración en **Finlandia**. Si bien sus orígenes franceses eran más complejos, las fuerzas reaccionarias se apoderaron del símbolo y lo hicieron suyo, algo que se confirmó en febrero cuando los líderes del gobierno populista de Italia se **reunieron con** destacados miembros del movimiento de chalecos amarillos y les expresaron su apoyo.

En Francia, al momento de redactar este informe los números de la protesta continuaban disminuyendo, pero la ira que la gente expresó en las calles probablemente no esté muy lejos de la superficie. El gobierno ha hecho concesiones, pero ahora tiene que hacer algo mucho más difícil: demostrar que está verdaderamente dispuesto a escuchar.